

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

PROGRAMA PROFESIONAL DE DERECHO Y CIENCIAS
POLÍTICAS



“LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO PERIODO 2015-2016”

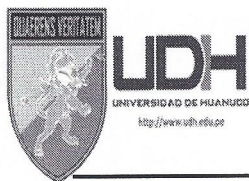
TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE ABOGADO

Bachiller: EDY LUZ ESPINOZA AGUIRRE

ASESOR: MG JOSÉ LUIS MANDUJANO RUBÍN

Huánuco – Perú
2017





UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 206-2017-DCATP-UDH
Huánuco, 04 de diciembre de 2017

Visto la Resolución N° 172-2017-DCATP-UDH de fecha 30 de junio de 2017 que declara **APROBAR** el Proyecto de Investigación intitulado **“LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO 2015-2016”**, presentado por la Bachiller **Edy Luz ESPINOZA AGUIRRE**;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 12° del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas vigente para el caso determina las diversas modalidades al cual el Graduando puede acogerse para obtener el Título Profesional de Abogado.

Que, mediante Resolución N°:587-2015-R-CU-UDH de fecha 29 de mayo de año 2015 se aprobó el ciclo se Asesoramiento para la tesis profesional- CATP/DERECHO del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, en atención al Art. 31 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH;

Que, mediante oficio de fecha 09 de noviembre de 2017, el José Luis Mandujano Rubin Asesor del Proyecto de Investigación **“LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO 2015-2016”**, aprueba el informe final de la Investigación;

Que, en cumplimiento al Art. 31 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y CC.PP vigente para el caso y a mérito del documento de visto y habiendo el Bachiller previamente presentado los tres ejemplares de la referida Tesis debidamente espiralados, es pertinente emitir la Resolución de Jurado y señalar fecha y hora para su Sustentación;

Estando a lo dispuesto en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; Reglamento de Grados y Títulos aprobado con Resolución N° 316-2013-R-CU-UDH del 25 de abril de 2013 y la facultad contemplada en la Res. N° 571-2013-R-UDH;

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - **DESIGNAR** al Jurado Calificador para examinar la Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, Bachiller **Edy Luz ESPINOZA AGUIRRE**, para obtener el Título Profesional de **ABOGADA** por la modalidad de ciclo se Asesoramiento para la tesis profesional; a los siguientes docentes:

Abg. Hugo Peralta Baca	: Presidente
Abg. Hugo Vidal Romero	: Secretario
Abg. Eduardo Lavado Iglesias	: Vocal

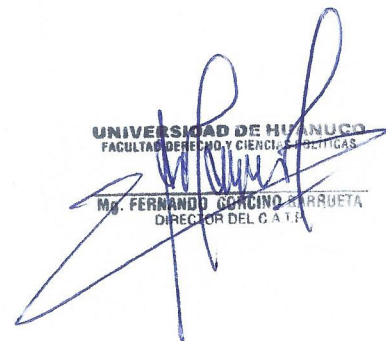
RESOLUCIÓN N° 206-2017-DCATP-UDH
Huánuco, 04 de diciembre de 2017

Artículo Segundo.- Señalar el día viernes 15 de diciembre de 2017 a horas 5:00 p.m. dicha Sustentación, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza.

Regístrese, comuníquese y archívese



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
DECANO
Madristero Levallos Acosta Dr. D.
DECANO DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS



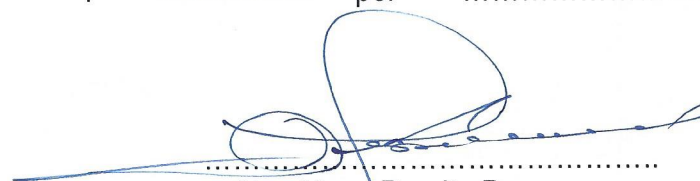
UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Mg. FERNANDO GARCINO BARRUETA
DIRECTOR DEL C.A.T.P.


**ACTA DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN POR LA MODALIDAD DE PRESENTACION
Y SUSTENTACION DE UNA TESIS**

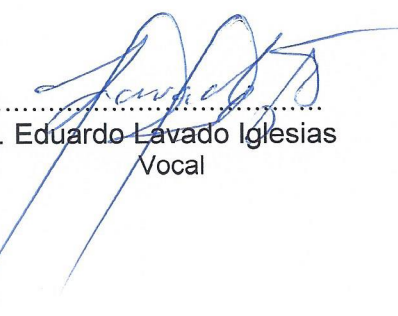
En la ciudad de Huánuco, siendo las 5:00 pm horas del día quince del mes de diciembre del año dos mil diecisiete se reunieron en el Salón de Simulación de audiencias de la universidad los miembros Ratificados del Jurado Examinador, designados por Resolución N° 206-2017-DCATP -UDH del 04 de diciembre de 2017, al amparo de la nueva Ley Universitaria N° 30220 inc "n" del Art. 44 del Estatuto de la Universidad de Huánuco, Reglamento de Grados y Títulos, para proceder por la modalidad de Presentación y Sustentación de una Tesis de la Graduada **Edy Luz ESPINOZA AGUIRRE** el postulante al Título de Abogada, procedió a la exposición de la Tesis, absolviendo las interrogantes que le fueron formuladas por los miembros designados del Jurado, de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias; realizado el exposición, el Jurado procedió a la calificación.

<u>JURADOS CALIFICADORES</u>		<u>PUNTAJE</u>
Abg. Hugo Peralta Baca	Presidente	<u>16</u>
Abg. Hugo Vidal Romero	Secretario	<u>16</u>
Abg. Eduardo Lavado Iglesias	Vocal	<u>16</u>
CALIFICATIVO :		
	<u>16</u>	<u>Dieciseis</u>
	En números	En letras

RESULTADO : Aprobada por Unanimidad.


.....
Abg. Hugo Peralta Baca
Presidente


.....
Abg. Hugo Vidal Romero
Secretario


.....
Abg. Eduardo Lavado Iglesias
Vocal

DEDICATORIA

El presente trabajo, lo dedico:

- A mi Dios; que sin el nada somos ni podemos nada.
- A mis padres, a mis hermanos que son los motivos más importantes de mi ser.

AGRADECIMIENTO

A los docentes por sus instrucciones y colaboración permanente para la consecución de mi carrera y la elaboración de mi trabajo de investigación.

El investigador.

Portada	
Dedicatoria	
Agradecimiento	
Índice	

CAPITULO I INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción del problema	07
1.2. Formulación del problema	08
1.3. Objetivo general	09
1.4. Objetivos específicos	09
1.5. Justificación de la investigación	09
1.6. Limitaciones de la investigación	10
1.7. Viabilidad de la investigación	10

CAPITULO II MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación	12
2.2 Bases teóricas	17
2.3 Definiciones conceptuales	41
2.4 Hipótesis	43
2.5 Variables	43
2.5.1. Variable dependiente	43
2.5.2. Variable independiente	43
2.6 Operacionalización de variables	43

CAPITULO III METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 Tipo de investigación	44
3.1.1. Enfoque	44
3.1.2. Alcance o nivel	44
3.1.3. Diseño	44
3.2 Población y muestra	44
3.3 Técnica e instrumentos de investigación	46
3.3.1. Para la recolección de datos	46
3.3.2. Para la presentación de datos	46
3.3.3. Para el análisis e interpretación de datos	46

CAPITULO IV RESULTADOS

4.1 Procesamiento de datos	47
4.2 Contrastación de hipótesis y prueba de hipótesis	55

CAPITULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1 Presentar la contratación de los resultados del trabajo de investigación 56

CONCLUSIONES 59

RECOMENDACIONES 60

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 61

ANEXOS

- Matriz de consistencia (Anexo 01)
- Instrumentos de recolección de datos (Anexo 02)
- Ilustraciones (Anexo 03)
- Resolución de aprobación del proyecto de trabajo de investigación (Anexo 04)
- Cualquier otra información complementaria (Anexo 05)

RESUMEN

En el presente trabajo de investigación titulado “LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO PERIODO 2015-2016”. Es de tipo Aplicado puesto que se aplicará la norma hecho objeto de estudio.

El objeto de nuestra investigación es determinar si la prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016. Para la obtención de resultados se ha diseñado instrumentos que nos permitan recabar información eficiente de los expertos en materia penal.

Nuestra principal conclusión es que al aplicar la prisión preventiva se esta dando una sentencia anticipada sin haberlo demostrado si es culpable o inocente restringiendo el derecho a defenderse en libertad y poder recoger evidencias que demuestren su inocencia.

Por lo que se vulnera el derecho de presunción de inocencia por aplicación de la prisión preventiva en el nuevo proceso penal.

INTRODUCCIÓN

Como se mencionó al inicio, la prisión preventiva es una privación legal de libertad impuesta sobre una persona como medida de precaución. Se toma esta medida con el fin de garantizar una efectiva investigación del delito al que se vincula al imputado, su juzgamiento y su eventual cumplimiento de la pena.

La presente tesis cuyas líneas de investigación académico busca demostrar que la aplicación de la prisión preventiva vulnera la presunción de inocencia y a realizar una defensa efectiva restringiéndolo en la medida que no podrá recabar suficientes elementos de convicción que demuestren su inocencia

En ese sentido, y siguiendo un estricto respeto por el principio legal relativo a la presunción de inocencia, para efectos del presente trabajo esta definición de la prisión preventiva abarcará tanto a las personas detenidas e imputadas por un delito y que están a la espera de que se realice un juicio.

En el capítulo I presentamos como punto de partida la problemática observada por ello se plantea el problema, se formula los objetivos, la justificación y los aportes que se pretenden establecer.

En el capítulo II, denominado marco teórico, presentamos los antecedentes del estudio y los planteamientos propia mente dichos, estos fundamentos teóricos parte de un análisis normativo, las mismas que permiten formular las hipótesis.

En el capítulo III, encontraremos la metodología, las técnicas e instrumentos a utilizarse. Ello comprende el nivel y tipo, los métodos de investigación, aquí también se identifica la variable e indicadores precisándose la población y muestra.

En el capítulo IV, lo constituye los resultados que se presentan en cuadros y gráficos y finalmente en el capítulo V presentamos la discusión de resultados, para finalizar con las conclusiones y sugerencias junto con las referencias bibliográficas utilizadas y finalmente los anexos con la matriz de consistencia y los instrumentos de investigación.

CAPÍTULO I

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.- Descripción del problema.

El problema de investigación que pretendemos investigar está relacionado con la prisión preventiva y la vulneración de la presunción de inocencia, en el Distrito Judicial de Huánuco.

Según un estudio de ILANUD, entre los años 1978 y 1992, el porcentaje de las personas presas sin condena en quince países de América Latina presentaba un promedio por sobre el 50% del total de la población penitenciaria. En nueve de los países de la región, el promedio llegaba a un 70%.

En este contexto, se introdujo la audiencia como metodología para tomar decisiones judiciales –incluidas las audiencias preliminares para discutir la procedencia de la prisión preventiva–, se regularon normativamente un conjunto amplio de medidas cautelares distintas, y se buscó disminuir el número de persona privadas de libertad sin condena.

Esta área de trabajo se enfoca en los avances y desafíos que se han enfrentado en estos temas, así como en la necesidad de un debate en las audiencias preliminares y la racionalización de las medidas cautelares, para esto último explorando programas de la experiencia comparada como los servicios de antelación al juicio.

1.2.- Formulación del Problema.

La prisión preventiva y el principio constitucional de la presunción de inocencia se ven enfrentados en nuestra realidad Huanuqueña por la mal praxis de los órganos jurisdiccionales (Ministerio Público y Poder Judicial), la prisión preventiva no puede constituir una pena anticipada. En ese sentido la Constitución Política del Perú ha establecido que la presunción de inocencia prohíbe que se dispongan medidas en anticipo de la pena, que en sus efectos igualen a la pena privativa de libertad.

La prisión preventiva es un instituto problemático por el grado de injerencia en la libertad personal que implica a una persona que se presume

inocente, por ello tienen gran importancia los límites que de acuerdo al derecho constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos trazan los principios de presunción de inocencia y de proporcionalidad.

Sin embargo, la legislación ordinaria y la práctica judicial huanuqueña, peruana incluso latinoamericana siguen resistiéndose al cambio al respecto y más bien se han endurecido con los reclamos de ley y orden de los medios periodísticos y de la población con escasa cultura jurídica.

Por esta razón nos hemos propuesto realizar la presente investigación, ya que sus resultados contribuirán a realizar una propuesta para regular el respeto por la presunción de inocencia y los límites de la Prisión Preventiva por parte de los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Huánuco.

a) **PROBLEMA GENERAL**

PG: ¿En qué medida la prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016?

b) **PROBLEMAS ESPECÍFICOS**

PE1: ¿De qué manera la presunción de inocencia es transgredida por el nuevo proceso penal en el Perú?

PE2: ¿En qué grado el derecho procesal peruano es predominante sobre el principio y garantía constitucional de la Presunción de Inocencia en el Perú?

PE3: ¿Cómo, la prisión preventiva quebranta el derecho a la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco en el periodo 2015-2016?

1.3.- Objetivos GENERAL

OG: Determinar si la prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016.

1.4.- b) Objetivo específicos

OE1: Analizar de qué manera la presunción de inocencia es transgredida por el nuevo proceso penal en el Perú.

OE2: Examinar en qué grado el derecho procesal peruano es predominante sobre el principio y garantía constitucional de la Presunción de Inocencia en el Perú.

OE3: Investigar como la prisión preventiva quebranta el derecho a la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco en el periodo 2015-2016.

1.5.- Justificación de la investigación.

El presente proyecto de investigación se justifica plenamente porque a través de él se identificó los factores que establezcan la vulneración de la presunción de inocencia en el distrito judicial de Huánuco con la práctica jurídica recurrente de requerir prisión preventiva por parte del Ministerio Público, asimismo la problemática jurídica de la supuesta vulneración del derecho fundamental que toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad como principio constitucional en el otorgamiento de la prisión preventiva en el distrito judicial de Huánuco; consecuentemente se esbozaran algunas alternativas o propuestas a fin de que se apliquen otras medidas de coerción regulados por la ley procesal penal, para finalmente, esclarecer si la prisión preventiva influye en la vulneración de la presunción de inocencia regulado en el ordenamiento jurídico peruano.

En ese sentido se trata de consolidar los conocimientos sobre la prisión preventiva y la presunción de inocencia en el distrito judicial de Huánuco, al ser asidua la problemática que existe en la práctica judicial huanuqueña, asimismo la presente investigación posee un impacto social por cuanto está orientado al respeto de los derechos

fundamentales de la persona humana y un impacto jurídico por cuanto sirve de base para que los administradores de justicia puedan requerir y otorgar la prisión preventiva en ultima ratio; además se determinara si existe la vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia con la aplicación de la prisión preventiva en el proceso penal que termina con una sentencia absolutoria, estableciendo si es necesaria su práctica y cuáles son sus límites.

1.6.- Limitaciones

La principal limitación de esta investigación es de orden teórico, en la medida de que éste es un tema de estudio nuevo en la Región de Huánuco; existen pocas investigaciones y estudios, sobre el problema planteado dificultando la realización de esta por falta de información, asimismo la falta de material bibliográfico que no existen en las bibliotecas de la Universidades de esta Región, además otra limitación importante es el trámite administrativo que conlleva (demasiado tiempo) para obtener las estadísticas de prisión preventiva en el Distrito Judicial de Huánuco de las instituciones jurisdiccionales de Huánuco.

1.7.- Viabilidad de la Investigación

la presente investigación, tiene limitaciones y es preciso cuestionarse ¿Es posible realizar esta investigación? Es importante la respuesta a dicha pregunta, para precisar el cumplimiento de la investigación, en ese sentido la viabilidad se desarrolla desde los siguientes aspectos:

- Académico: A pesar de las limitaciones bibliográficas en la región Huánuco. Internet y algunos libros especializados de propiedad de la investigadora, además se cuenta con los expedientes que obran en los Juzgados Penales de la Provincia de Huánuco a fines al proyecto de investigación son las fuentes para su desarrollo, y posterior ejecución, por lo que es viable su realización.

- Material: Se utilizarán materiales informáticos para la realización del presente proyecto, como son computadora e impresora;

asimismo materiales de escritorio como son papeles, fichas bibliográficas, lapiceros; que son de uso diario y fáciles de obtener en la Región Huánuco por lo que resulta viable la presente investigación.

- Económico: Actualmente la investigadora cuenta con ingresos económicos autofinanciando la presente investigación facilitando los recursos económicos, para la realización del presente proyecto.

En ese sentido el presente proyecto de investigación es viable.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

II MARCO TEÓRICO

2.2.- Antecedentes de la Investigación

Habiendo efectuado la búsqueda de investigaciones referidos al objeto de la presente investigación, no se ha encontrado ninguna investigación que haya tratado sobre los factores que establecen que la prisión preventiva influya en la vulneración de la presunción de inocencia, en la región Huánuco, sin embargo cabe precisar que se ha encontrado investigaciones en otros departamentos del país referidos al tema de investigación, así también existe literatura jurídica sobre temas relacionados, las mismas que tratan de forma la prisión preventiva frente a la presunción de inocencia y que han contribuido a la presente investigación, debiendo resaltar los siguientes:

En la Tesis denominada: **“PRISIÓN PREVENTIVA Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA”**, presentado por los Bach. Efraín Vicente Zavaleta Cocuera y Elmer Roger Calderon Moreno; para obtener el Título de Abogado, en la Universidad Nacional de Trujillo, presentado en la ciudad de Trujillo, el año 2014. Resume:

“El presente trabajo de investigación titulada “LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA AFECTA EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA DEL PROCESADO”. Con la elaboración de este trabajo se ha planteado un esquema de cómo la prisión preventiva es la medida limitativa más grave del ordenamiento procesal penal peruano, en consecuencia, el principio de proporcionalidad exige una aplicación excepcional y subsidiaria.

Debe ser la última ratio o último recurso para salvaguardar el resultado y desarrollo del proceso penal. Respecto a este punto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el Expediente N° 1091-2002-HC, señala: —Si bien la detención judicial preventiva (prisión preventiva) constituye una medida que limita la libertad física, por sí misma, esta no es inconstitucional.

Para el presente informe de investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada descriptiva y el diseño de investigación no experimental transversal/correlacional, así como los siguientes métodos: método inductivo – deductivo, analítico y sintético, y por último se aplicaron las siguientes técnicas de investigación: la entrevista, la encuesta y análisis documental.”

Artículo académico publicado en el blog electrónico del estudio Jurídico Loza Avalos Abogados, **“La Prisión Preventiva Frente a**

la Presunción de Inocencia en el NCPP, Autora Cintia Loza Avalos, Lima-Perú, febrero 2013, resume que:

“El presente trabajo se desarrolla el emblemático debate jurídico-penal que siempre ha existido entre la presunción de inocencia y la prisión preventiva durante la sustanciación de un proceso penal, procurando identificar los principales cuestionamientos y/o aspectos problemáticos que pudieran generarse, así como las justificaciones que las han promovido.

Es por ello que resulta importante, plantear las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la finalidad de la prisión preventiva en el marco del principio de presunción de inocencia? ¿La prisión preventiva es la regla o la excepción? Y por último, la más emblemática ¿La prisión preventiva vulnera o no el principio de presunción de inocencia?”

Libro publicado por el Instituto de Defensa Legal, ***“La prisión preventiva en el Perú: ¿medida cautelar o pena anticipada?”***, Autores Ernesto de la Jara, Gabriel Chávez-Tafur, Andrea Ravelo, Agustín Grández, Óscar del Valle y Liliana Sánchez, Lima-Perú, Setiembre 2013, concluye que:

“En suma, encontramos que la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar en el Perú ha sufrido grandes cambios a partir de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal del 2004. Por un lado, nos parece muy alentador que los fiscales estén utilizando un alto grado de discrecionalidad a la hora de pedir que se imponga la medida —si bien también observamos que, si la solicitan, es bastante probable que el juez la otorgue—, así como que la decisión se tome en una audiencia pública y contradictoria, en la cual el imputado tiene siempre a un abogado a su lado.

Muy especialmente, consideramos un desafío urgente contrarrestar la dependencia de fiscales y jueces respecto de un concepto excesivamente formal de lo que significa arraigo domiciliario y laboral, concepto que, como se ha visto, afecta y deja en una situación de particular vulnerabilidad a los sectores más desfavorecidos”

Habiendo efectuado la búsqueda de investigaciones referidos al objeto de la presente investigación, se ha encontrado investigaciones a nivel internacional, las mismas que tratan de forma la prisión preventiva y la vulneración de la presunción de inocencia, que han contribuido a la presente, conforme se detalla:

En la Tesis denominada: **“LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA PRÓRROGA DE ENCARCELAMIENTO, LÍMITES A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA O CULPABILIDAD”**, presentado por Nelson Estuardo Zarat Llamas; para obtener el Grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentado en la ciudad de Guatemala, el año 2009. Concluye:

“Los encargados de la administración de justicia, no aplican la teoría del delito, situación que queda plasmada por parte de los jueces penales a la hora de

resolver la situación jurídica de un sindicado y los abogados y fiscales, al momento de hacer sus peticiones desde la primera declaración del sindicado.

La Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho de las personas a gozar de su libertad como regla general durante todo el proceso penal, situación que es vulnerada por los jueces penales al resolver la situación jurídica de un sindicado.

La limitante principal para una justicia pronta y eficaz tiene su principal raíz en la desmedida aplicación de la prisión preventiva, ya que una persona detenida por el supuesto comiso de un delito tiene seguridad de ser ya culpable sin que se le compruebe antes lo contrario. La Corte Suprema de Justicia, viola el principio de inocencia al autorizar la prórroga de encarcelamiento cuantas veces sea necesario, a un sindicado o acusado que no tiene sentencia condenatoria firme”

En la Tesis denominada: **“LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO UNA CONDENA ANTICIPADA POR EL TIEMPO EXAGERADO EN QUE SE JUZGA AL IMPUTADO PREVIA IMPOSICIÓN DE UNA SENTENCIA CONDENATORIA, EN EL DEPARTAMENTO DE ALTA VERAPAZ”**, presentado por Elba Yolanda Archila Coronado; para optar el Grado de Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, presentado en la ciudad de Guatemala, el año 2007. Concluye:

“La prisión preventiva constituye una condena anticipada, reconocida explícitamente en las sentencias condenatorias, cuando se indica que a la pena se le ha de abonar *la prisión ya efectivamente sufrida*. La prisión preventiva se prolonga considerablemente por dos razones: aplazamientos del período de investigación solicitados a la Corte Suprema de Justicia ha pedido del tribunal o del Ministerio Público y larga espera de la fecha del debate, por calendarización de los mismos, en los tribunales de sentencia. La prisión preventiva se convierte en condena anticipada cuando en un alto porcentaje de los procesos, se condena en la primera instancia y en la segunda se absuelve.”

En la Tesis denominada: **“LA PRISIÓN PREVENTIVA Y EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN LA UNIDAD JUDICIAL ESPECIALIZADA DE GARANTÍAS PENALES DE TUNGURAHUA”**, presentado por Fernando Vladimir Chimpatiza Masaquiza; para optar el título de Abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador, en la Universidad Técnica de Ambato, presentado en la ciudad de Ambato-Ecuador, el año 2014. Concluye:

“La aplicación de la medida cautelar de tipo personal de la prisión preventiva vulnera el principio de presunción de inocencia en la Unidad de Garantías

Penales de Tungurahua. El 72% de los abogados inscritos en el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura que fueron encuestados consideran que existe violación del principio de presunción de inocencia cuando se aplica o dicta la prisión preventiva. El 90% de los abogados inscritos en el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura que fueron encuestados opinan que es necesario garantizar de una mejor manera el principio de presunción de inocencia.

El 59% de los abogados inscritos en el Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura que fueron encuestados consideran que no se cumple con el principio de presunción de inocencia en la Unidad de Garantías Penales de Tungurahua, por consiguiente, es aceptable manifestar que existe detenciones ilegítimas que vulneran el principio de presunción de inocencia. El procedimiento Penal para ordenar la prisión preventiva por parte del Juzgador en gran porcentaje inobserva los principios constitucionales del debido proceso y principalmente, por lo que es atropellado el principio de presunción de inocencia de las personas detenidas.”

En la Tesis denominada: **“EFECTOS DE LA PRISIÓN PREVENTIVA SEGÚN LO DETERMINADO EN LA CONSTITUCIÓN Y ESTUDIO DE POSIBLES SOLUCIONES PARA SU DEBIDA APLICACIÓN”**, presentado por Andrés Isaías Palacios Gómez; para optar el título de Abogado de los Tribunales y juzgados del Ecuador, en la Universidad Estatal Península de Santa Elena, presentado en la ciudad de La Libertad-Ecuador, el año 2011. Resume:

“El objetivo de este estudio es examinar la prisión preventiva a través de los Instrumentos Internacionales y Nacionales, que permitan proponer reformas legales e institucionales. En materia de prisión preventiva, los derechos fundamentales constituyen limitaciones normativas, por ello, antes de la adopción de esta medida cautelar se interpondrán el principio de inocencia y el respeto a la libertad como Garantías Constitucionales. Las medidas de coerción personal, entre ellas la prisión preventiva, solo encuentran explicación en la necesidad asegurativa, susceptible de ser graduada de acuerdo a con las circunstancias del caso, recurriéndose al encierro sólo en casos imprescindibles y por un tiempo acotado.”

En la Tesis denominada: **“LA PRISIÓN PREVENTIVA ARBITRARIA SIN INDICIOS SUFICIENTES VULNERA LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO”**, presentado por Mayra Elizabeth Luzuriaga Riera; para optar el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados del Ecuador, en la Universidad Internacional del Ecuador-Sede Loja, presentado en la ciudad de Loja-Ecuador, el año 2013. Resume:

“La presente investigación está basada en el análisis jurídico, doctrinario y crítico de Prisión Preventiva, La libertad personal, luego del derecho a la vida es uno de los derechos fundamentales inherentes a la personalidad humana, de cuyo goce depende el ejercicio de los otros derechos que contemplan la Constitución y las Leyes.

En la Tesis denominada: **“ LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA Y SU CONTRAPOSICIÓN CON LA PRISIÓN PREVENTIVA”**,

presentado por Freddy Iván Mena Morales; para optar el título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador, en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, presentado en la ciudad de Quevedo-Los Ríos-Ecuador, el año 2015. Resume:

El Marco Metodológico está contenido por la modalidad que se llevó a cabo en la investigación, siendo principalmente de campo y bibliográfico por la necesidad de consultar el criterio a los profesionales del derecho sobre el tema, así también de los Jueces como conocedores de la materia sobre este tema de investigación. Los resultados permitieron comprobar que en nuestro país una norma legal prevalece sobre la Constitución. Como conclusión se estableció la necesidad de plantear una respuesta a esta problemática, misma que consiste en implementar una política de capacitación permanente a los operadores de justicia en temas de derecho constitucional”

2.2.- Bases Teóricas

PRISIÓN PREVENTIVA

Es la medida de coerción personal más gravosa o severa del ordenamiento jurídico, que por sus efectos y trascendencia es el problema por antonomasia del proceso penal. Surge como consecuencia de una resolución jurisdiccional, debidamente motivada, de carácter provisional y duración limitada que se adopta en el seno de un proceso penal, por la que se priva del derecho a la libertad del imputado por la comisión de un delito grave y en quien concurre (fines) un peligro de fuga suficiente para presumir racionalmente que se ausentará a las actuaciones del proceso, o un riesgo razonable de ocultación o destrucción de las fuentes de prueba (periculum, art. 268.1c NCPP) [Gimeno Sendra], La norma, al hacerlo ¿sí, restringe el ámbito de aplicación de la prisión preventiva al cumplimiento estricto de los fines, de manera que la medida solo podrá decretarse cuando exista un peligro concreto y fundado y siempre motivadamente [Asencio]. Se exige la configuración de un peligro concreto y fundado, explicitado en el auto judicial, de modo tal que sea instrumental del proceso al cual se preordena. Está regulada en el Título III de la Sección Tercera del libro Segundo del NCPP: arts. 268-285 NCPP, ordenados en seis capítulos.

La finalidad de la prisión preventiva es asegurar la presencia del imputado durante la celebración del proceso penal para garantizar: 1) el desarrollo del proceso declarativo, evitando el peligro de ocultación o alteración de las fuentes-medios de prueba, y 2) la ejecución de la futura y eventual pena o medida a imponer, para lo que se hace necesario evitar el peligro de fuga.

En efecto, el propósito que oriente a la prisión preventiva es de carácter preventivo y no sancionatorio, se busca responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la concurrencia del imputado al proceso y la efectividad de la eventual condena a imponer. De esta manera, la privación procesal de la libertad persigue impedir al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictiva o de la labor que emprenda con la expofesa finalidad de ocultar, destruir o desvirtuar los elementos probatorios importantes para la investigación y posterior juzgamiento.

Una de las características más notorias, unida a su absoluta (i) jurisdiccionalidad —solo el juez competente, legalmente determinado e imparcial puede adoptarla, tras un procedimiento oral, que se corona en una audiencia, siempre a instancia del fiscal—, es la (ii) excepcionalidad de la medida y su no obligatoriedad. Lo normal es la espera del juicio en situación de libertad, por lo que no puede haber más supuestos de prisión preventiva que los que la ley de forma taxativa y razonablemente detallada prevea —en su aplicación las normas han de ser interpretadas de modo estricto, y que al recurrir a ella ha de hacerse de modo necesario en orden a los supuestos taxativamente previstos por la ley. En tal virtud, rige el principio de favor libertatis o de indubio prolibertate, de suerte como ya se anotó en la interpretación y aplicación de las normas que la regulan debe hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental que tales normas restringen. Este principio, a su vez, ha de conducir, asimismo, a la elección y aplicación en caso de duda, de la ley más favorable, esto es, la menos restrictiva de la libertad.

Otra característica es la (iii) proporcionalidad, en cuya virtud esta debe adecuarse a los fines constitucionalmente legítimos: asegurar normal desarrollo del proceso, y la ejecución del fallo —asegurar la disponibilidad del imputado a los fines del proceso-, a la que solo ha de acudirse en situaciones importantes y graves. El NCPP, en la materia, no ha considerado el riesgo de reiteración delictiva como sí sucede en la legislación colombiana por ejemplo donde bajo la Ley N° 1453 de 2011, denominada Ley de Seguridad Ciudadana, estableció dicho elemento como criterio para la determinación de una adopción de prisión preventiva. Finalmente, otra característica esencial (iv) es la temporalidad: su duración viene condicionada al cumplimiento de plazos legales, considerados como máximos, lo que no significa que, en el caso concreto, judicialmente, pueda concebirse una menor.

En tanto la prisión preventiva es una medida de coerción y sus fines han de ser constitucionalmente legítimos, lo que se expresan a través del *periculum libertatis*, no puede atribuírsele la función de anticipar la pena —un no culpable no puede ser castigado a través de la prisión preventiva— (STC n.º 0791-2002-HC TC, FJ 19). En la sentencia de 17-11-09, caso Barreto Leiva vs. Venezuela, la CIDH ratificó la postura

conforme a la cual la detención fundada en fines preventivo-punitivos sería contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos: la privación de la libertad del imputado no puede residir en fines preventivo-generales o preventivo-especiales atribuibles a la pena, sino que solo puede fundamentar en un fin legítimo, a saber, asegurar que el acusado impedirá el desarrollo del procedimiento ni eludirá la acción de la justicia”, Tampoco es aceptable que cumpla la función de calmar la alarma social que haya podido producir el hecho delictivo, cuando aún no se ha determinado quien es el responsable. Igualmente, la prisión preventiva no es un instrumento de la investigación penal, que de ser así colocaría a esta en un lugar muy próximo a la tortura indagatoria. Esta interpretación se encuentra proscrita por el Tribunal Constitucional Español, pues ha declarado la ilicitud de su utilización con la finalidad de propiciar esta como medio de prueba para obtener declaraciones pruebas, etc. (STCE N.º 128/1995 de 26 de julio).

Debe quedar claro que la presunción de inocencia es compatible con la adopción de medidas de coerción, toda vez que lo que puede llegar a violar esta garantía constitucional es solo la condena sin pruebas o en virtud de prueba irregularmente obtenidas, o hechas valer en la causa sin las garantías debidas. El auto de detención o el de prisión preventiva no incide en el ejercicio del ius puniendi del Estado, que se proyecta sobre el modo de acreditar o fundamentar la culpabilidad del acusado (SSTCE N.º 71/1994, de 03-03-94, y 127/1998, de 15-06-98).

De otro lado, no infringe esta garantía -de por sí inaplicable- estimar como justificación o único fundamento de la prisión preventiva los peligros de fuga y de obstaculización. En efecto, si se mantiene con rigor -y con acierto porque la necesidad del proceso penal y de la defensa como actividad real del imputado en él escapan a la voluntad de quien la sufre la prohibición de procesas penales en rebeldía, no será posible evitar del todo algún modo de privación de la libertad durante el procedimiento.

La prisión preventiva es admisible en cualquier estado del procedimiento. Aunque su sede natural es la investigación preparatoria. Asimismo, es revisable en cualquier momento del procedimiento, lo que implica su provisionalidad variabilidad de suerte que deben ser mantenidas cuando sea estrictamente necesario y en ningún caso debe aplicarse con fines punitivos.

Se debate si en la etapa de juzgamiento puede plantearse la medida de prisión preventiva y de ser factible. ¿Qué juez la resuelve? En primer lugar, desde la propia expresión lingüística del supuesto normativo, es obvio que puede hacerse en cualquier estado del procedimiento declarativo en primera instancia (art. 279 NCPP), lo que es reflejo de la nota característica de provisionalidad o variabilidad.

En segundo lugar, si el proceso transcurre por etapas que precluyen, no es posible que el incidente que se plantea en el acto oral -de naturaleza concentrado sea devuelto a otro órgano jurisdiccional. En tercer lugar, es aplicable el art. 28.3.b del NCPP. En cuarto lugar, no se produce ninguna pérdida de la imparcialidad porque el procedimiento se realiza al amparo del principio de contradicción y porque el juicio es de mera probabilidad delictiva y se centra además en la peligrosidad procesal.

Por último, la legitimidad constitucional de la prisión preventiva exige que su configuración y su aplicación tengan, como presupuesto, la exigencias de sospecha vehemente o bastante de la comisión por el imputado de una conducta delictiva grave.

Presupuestos

Son dos los presupuestos de la prisión preventiva: materiales y formales, en los que destaca la realización de una audiencia para la adopción de la medida.

Presupuestos materiales

Son dos: fundados y graves elementos de convicción, y motivos de prisión específicos: gravedad del delito y peligro de fuga y/o de obstaculización. Se trata de fundamentos serios y objetivos para privar procesalmente de la libertad a un imputado.

Fundados y graves elementos de convicción

Se denomina sospecha vehemente o sospecha bastante de la existencia de un delito y de su atribución al imputado como autor o partícipe del mismo -se está ante un verdadero juicio de imputación-. Esta exigencia presupone un cierto grado de desarrollo de la imputación y significa, entonces, que debe existir un alto grado de probabilidad de que el imputado ha cometido el hecho y de que están

presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad [Roxin]; probabilidad de que la sentencia vaya a ser condenatoria. No basta una mera conjetura, la probabilidad de condena se debe fundamentar en indicios de los que quena deducir razonablemente la responsabilidad del sujeto.

La STEDH Fox, Campbell y Hartley, de agosto de 1990 precisó que se requiere de la concurrencia de elementos que sean suficientes para convencer a un tercero imparcial de que el individuo afectado por la medida puede ser el autor el hecho. La sospecha bastante o vehemente, a juicio del TEDH, opera como condición necesaria para adoptar y mantener la medida [STEDH W, de 26-01-93. No se requiere certeza, pues a esta situación se llega solo en la sentencia definitiva y tras un juicio oral en el que se ha desarrollado un debate contradictorio.

Motivos De Prisión

Son dos: delito grave y peligro procesal.

Gravedad del delito. La ley fija un criterio cuantitativo en función a la prognosis de la pena privativa de libertad que se espera imponer según los criterios de medición previstos en el Código Penal: superior a cuatro años de privación de libertad. Es de tener presente que el transcurso del tiempo lleva a que el criterio de la gravedad vaya perdiendo consistencia y, en las posibles prórrogas, o en el mantenimiento de la medida empiecen a ser más relevantes las circunstancias personales del imputado y las circunstancias del caso.

Peligro procesal elemento teleológico. Es su presupuesto principal. Se concreta en cualquier acción que pueda realizar el imputado estando en libertad, y que pueda de algún modo comprometer la tutela que se dispense en la sentencia o la finalidad legítima del proceso.

La naturaleza del delito y la gravedad de la pena no son suficientes, no puede aplicarse la prisión automáticamente. No se puede justificar la privación procesal de la libertad bajo presunciones de orden criminal, aunque tal posición no se deriva de la garantía de presunción de inocencia -como señaló la STC N.º 1802-2005-HC/TC, de 29-04-

05-, sino del principio de proporcionalidad. La gravedad y la modalidad del hecho constituyen, en línea de principio, un factor genérico para afirmar la peligrosidad, que, en todo caso, deber ser concretado con las particularidades del caso concreto. Ha de constatarse la presencia de los dos peligrosismos legalmente previstos: de fuga -que es el paradigma del periculum libertatis y de obstaculización (arts. 268.1c y 269-270 NCPP) con lo que nuestra legislación asume una postura intermedia o teoría de los dos peligros.

Para decidir acerca del peligro procesal, se debe atender individualmente a los antecedentes y otras circunstancias del caso (situación personal, social y laboral) -de carácter subjetivo-, así como la moralidad del imputado, medios económicos de los que dispone; circunstancia de arraigo; la conexiones con otros países; conducta previa, concomitante y posterior del imputado; comportamientos realizados en otras causas, etcétera. Ninguno de los elementos valorativos de los distintos peligros que la norma quiere prevenir pueden ser apreciados de modo automático o imperativo, siendo siempre necesaria su evaluación de manera motivada y conforme a la situación que se quiere cautelar.

El Tribunal Constitucional ha desarrollado estos elementos de juicio que deben ser evaluados tanto antes como durante el desarrollo del proceso para determinar la existencia de peligro procesal (STC N.º 01555-2012-PHC/TC, FJ 16). El tribunal, de forma acertada, no los enuncia en una fórmula de numerus clausus, sino que establece que existe un ámbito propio de discrecionalidad de los magistrados para determinar los elementos que a su juicio confirman la existencia de un peligro de fuga. Los criterios que la Ley enuncia son meramente indicativos, nunca vinculantes y, desde luego, no constituyen un listado cerrado: se refieren tanto al sujeto como a los hechos delictivos, son datos que la experiencia acredita como determinantes de un mayor o menor peligro.

Asimismo, no puede constituirse como un criterio autónomo o suficiente de valoración, por ejemplo, la gravedad del tipo legal cometido por el imputado. La gravedad del hecho perpetrado es un criterio para la determinación de la pena concreta que recibirá el imputado, pero más allá de eso, el carácter de los hechos no descubre

nuevos factores, salvo que se vincule dicho carácter, de nuevo, con la conducta moral del procesado.

Atribuir consecuencias jurídicas por el carácter del hecho y no por la posible conducta del procesado o investigados durante la sustanciación del proceso, se asemeja a una pena anticipada.

Peligro de fuga.

El juez debe estimar la acreditación de la existencia de medios suficientes, a disposición del imputado, para perpetrar la fuga. Los criterios o circunstancias acreditativas que el NCPP incorpora, enunciativamente, en atención a las condiciones objetivas y subjetivas que pueden propender la fuga, son los siguientes: Aquellas vinculadas a la situación personal, familiar y económica del imputado, conocido como arraigo que tiene un carácter objetivo. En este aspecto se verificará, por ejemplo, los lazos familiares del imputado, si su familia vive con él sustenta a la unidad familiar, también su ocupación laboral que supone que el medio de subsistencia del imputado provenga de un trabajo desarrollado en el país o en su localidad, y finalmente si tiene un domicilio conocido dentro de la jurisdicción. Es importante mencionar que el análisis del arraigo no supone evaluar la existencia o inexistencia de este presupuesto, sino que se debe ponderar la calidad del arraigo. En este sentido, es legítimo imponer una prisión preventiva a una persona que tiene familia o domicilio conocido, cuando dicha situación, evaluada en términos de ponderación de intereses, no aleja al imputado del riesgo fundado de fuga (RA n.º 325-2011-P-PJ, de 13-09-11). Los vínculos ya referidos son meramente referenciales. Incidirá, sobremanera. La situación económica del imputado, es decir, si goza de una pudiente solvencia económica, está en mejores posibilidades de abandonar el país que un reo que a duras penas cuenta con una choza para vivir.

Asimismo, el arraigo al país, puede también valorarse conforme a los lazos familiares que el imputado mantiene en el exterior, de forma concluyente sí cuenta con una doble nacionalidad o más de dos, situación que le permite abandonar el país con mayor facilidad y refugiarse en su doble nacionalidad para evitar ser extraditado.

La gravedad de la pena esperable, criterio que establece el legislador para prever si el imputado piensa fugarse, pues es una información que el imputado puede valorar teniendo en cuenta el marco de la pena a esperar en una eventual sentencia condenatoria aunque es de actor que este criterio, por más que la pena conminada sea muy grave, no exime al juez de una consideración individual de las circunstancias específicas del caso (SCIDH Díaz Peña). La importancia del daño resarcible y la actitud del imputado frente a él si auxilió a la víctima o la abandonó, etc. Este criterio es desacertado, pues condiciona la valoración de la conducta del procesado frente a un hecho futuro e incierto como es el pago de una eventual reparación civil y, además, adopta un canon para la determinación de la pena como es el hecho de analizar su comportamiento frente a la víctima. Es claro que se puede salvaguardar la futura reparación de la víctima mediante la adopción de otras medidas idóneas mediante el embargo o la incautación.

El comportamiento del encausado durante el procedimiento o en otro procedimiento anterior si se pone a derecho una vez se entere del emplazamiento judicial, y cómo fue su conducta procesal en otras causas. Tratándose del comportamiento del procesado en otras causas, como por ejemplo, en el caso de una fuga consumada nos da una guía fiable del comportamiento futuro del imputado.

La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración, que es una guía recientemente incorporada y que debe ser valorada junto con el resto de criterios o circunstancias, pues su sola existencia no es requisito sine qua non para la aplicación de la prisión preventiva (RA n.º 235-2011-P-PJ— Circular sobre Prisión Preventiva), aunque esta integración como criterio de prisión preventiva sería más sólida si el imputado esté en posibilidad de servirse de la organización criminal para eludir la acción de la justicia, esto es, si sería un líder o cuadro regional o con algún nivel de mando y responsabilidad dirigente. Si se cumple esta nota característica, también debe concurrir la gravedad del delito perpetrado (STCE N.º 128/1995, de 26-07-95).

Peligro de obstaculización.

El riesgo de destrucción de prueba debe ser tan grave como para no poder ser evitado a través de otra medida de coerción. El juez debe evaluar la concreta disposición del imputado a ocultar pruebas, esto es, la averiguación de las fuentes de prueba en curso que podría ser obstaculizada por el imputado en libertad.

Las fuentes de prueba pueden ser afectadas por la conducta del imputado. Un conjunto de tres comportamientos relevantes incorpora el art. 270 NCPP: destrucción, modificación, ocultación, supresión o falsificación de elementos de prueba; influencia sobre órganos de prueba para que informen falsamente, desleal o reticentemente; e inducción a otros a realizar tales conductas. Esta resolución de forma clara vulnera el derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo, o a declararse culpable. Es evidente que la negativa de declarar de un imputado no puede utilizarse como fundamento para instaurar o mantener una medida de coerción como la prisión preventiva. Si se persiste en mantener este ilegítimo criterio en la aplicación de la prisión preventiva, se estaría obligando al imputado autoincriminarse a fin de evitar dicha medida. En esta misma línea de ideas, tampoco puede interpretarse como un supuesto de entorpecimiento las diversas versiones que manifieste el procesado.

Presupuesto especial.

Artículo 268.2 NCPP. En función a la gravedad del hecho pero en relación a imputados integrados en organizaciones o bandas criminales, siempre que pueda advertirse que puede utilizar los medios que estas le brinden para facilitar la fuga u obstaculizar la verdad. Los riesgos clásicos, aun con menor intensidad, deben darse; y, a su vez, resulta necesario acreditar el *fumus boni inris* y el *periculum*, con la especificidad, de ser el caso, de la integración en una asociación ilícita.

Este presupuesto, sin embargo, ha sido derogado. Los dos presupuestos materiales ya analizados es de insistir han de interpretarse desde el prisma de la proporcionalidad, que exige un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y de las

circunstancias concurrentes. Una medida irrazonable o desproporcionada tendría un carácter punitivo en cuanto al exceso.

Presupuestos formales

Conforme al art. 271 NCPP el auto de prisión preventiva debe dictarse previo procedimiento de audiencia, y la estructura del mismo, está sujeta a determinadas exigencias.

Audiencia de prisión preventiva

La audiencia de prisión preventiva es una manifestación, no solo del principio procedimental de oralidad, sino especialmente del principio de contradicción en el proceso penal, por el cual tanto el imputado como su abogado defensor cuentan con la posibilidad de contradecir la propuesta de prisión preventiva del Ministerio Público. El juez de la investigación preparatoria dicta el decreto de citación a la audiencia de prisión preventiva dentro de las cuarenta y ocho horas del requerimiento fiscal -se entiende que si no se pide la prisión preventiva procede la excarcelación y es automática la conversión de la medida en comparecencia, salvo que pida una medida alternativa o de comparecencia con restricciones. Se celebra con concurrencia obligatoria fiscal, imputado y defensor (si no asiste, se reemplazara con el de oficio). Rige el art. 8 NCPP: el pedido requiere que se adjunte los elementos de convicción. El fiscal debe acompañar expediente fiscal. Instalada la audiencia, se escucha al fiscal, al abogado, y al último al reo [si va agraviada, antes escucha a este]. La Casación ha definido que la intervención del imputado está sujeta a su presencia en el juicio.

La decisión se profiere en audiencia, sin postergación. Por tanto, se trata de una resolución oral.

Auto de prisión

Este será especialmente motivado, con expresión de la imputación, de los fundamentos de hecho y derecho que lo sustente, y la indicación de las citas legales pertinentes. La resolución se expide de forma oral. La oralidad de la resolución del juez no exime a este de su deber de motivación, pues esto una exigencia que tiene una doble perspectiva de aseguramiento, por un lado, la de garantizar la eficacia

del derecho a la tutela judicial efectivo y, de otro, la del respecto a la libertad personal del imputado (STC N.º 03784-2008-PHC/TC, FJ 6). Asimismo, el cumplimiento de la garantía de motivación de la decisión judicial permite al justiciable verificar la presencia de los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El juez puede optar por imponer al imputado prisión preventiva o comparecencia, simple o restrictiva, según el caso. El auto de prisión preventiva debe efectuar una descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión presunta del delito, con precisión de los elementos que caracterizan la imputación; asimismo, ha de justificar las razones por las que afirma que la privación de libertad es indispensable para garantizar los fines legítimos de esa medida. El juez ha de incorporar razones fundadas que justifiquen la necesidad y proporcionalidad de privar de la libertad durante el proceso. Se trata, pues, de una motivación reforzada o más estricta (STC N.º 1091-2002-HC/TC, de 12-08-02).

Duración Plazos ordinario y especial

El NCPP contempla dos modalidades de plazo, según exista sentencia o no sentencia de primera instancia. En la primera modalidad, el plazo ordinario de la prisión preventiva es de hasta nueve meses; empero, si el proceso es complejo (art. 342.3 NCPP) el plazo no durará más de dieciocho meses. Así, art. 272 NCPP lo ha reconocido de forma expresa. El plazo integra la garantía constitucional de la libertad, más no la agota, pues el plazo efectivo de duración de la situación de prisión preventiva, aún dentro de los límites del plazo máximo legal, tampoco puede excederse más allá de un plazo razonable (STCE N.º 8/1990, de 18-01-90).

Además, es de tener en cuenta que, si se trata de un plazo máximo y que, en todo caso, es un plazo judicial porque el juez lo fija cuando dicta la prisión preventiva, si establece un plazo inferior, a su vencimiento el imputado deberá excarcelarse o, con arreglo al art. 274 NCPP, solicitar la prolongación del plazo.

A su vencimiento, procede la excarcelación inmediata, sin perjuicio de dictarse medidas alternativas, previstas en el art. 288.2 al 4 NCPP: no ausentarse de la localidad que reside, no comunicarse con personas

determinadas, caución económica, la obligación de someterse al cuidado y vigilancia de una persona o institución determinada.

La segunda modalidad, que es un plazo distinto, se presenta cuando se dicta sentencia de primera instancia y esta es recurrida. El nuevo plazo es de la mitad de la pena impuesta: art. 274.4 NCPP.

Prolongación de la prisión preventiva

Si existe especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso, y subsiste peligro de fuga o de riesgo de perturbación de la actividad probatoria, es posible prorrogar la prisión preventiva por un plazo que no excederá de 18 meses: art. 274.2 NCPP. El fiscal la debe solicitar antes de su vencimiento. Se decreta la realización de una Audiencia de Prolongación, con asistencia de interesados, dentro del tercer día de presentado el requisito. Realizada esta, el juez decide en el mismo acto o dentro de las 72 horas siguientes.

Producida la excarcelación por vencimiento del plazo de prisión - ordinaria o prolongada-, se revocará la libertad si no asiste injustificadamente a la primera citación formulada, si se considera necesaria su presencia.

La CIDH en la SCIDH Genie Lacayo estableció tres presupuestos para evaluar la razonabilidad del plazo de detención preventiva: (i) La complejidad de asunto, que viene establecido por las circunstancias de hecho y de derecho del caso tales como: la prueba de los hechos, la pluralidad de los imputados, la gravedad de los hechos, la legislación ambigua o incierta; (ii) la actividad procesal del interesado, es decir, verificar si el imputado no ha hecho un uso abusivo e innecesario de los recursos o figuras permitidas por la ley procesal; (iii) la conducta de las autoridades judiciales, en donde hay que analizar circunstancias como la insuficiencia de los tribunales, la complejidad del régimen procedimental y la carga de trabajo. A partir del caso Valle Jaramillo y otros (SCIDH, de 27-11-08), la Corte incorporó un cuarto criterio: la afectación en la situación jurídica del procesado, donde se analiza si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del imputado, en cuyo supuesto resultará necesario sea más expeditivo. La duración excesiva o

desproporcionada de la prisión preventiva genera una suerte de transformación de su naturaleza: de cautelar a punitiva. STC N.º 2915-2004-HC/TC, de 23-11-04.

Lo constitucionalmente relevante, en cuanto garantía sustancial del procedimiento, es la existencia mínima de un control o recurso ante un órgano superior, y que se preserve la garantía de contradicción y de brevedad en la sustanciación del remedio que la legislación instrumente (STCE N.º 3/1992, de 13-01-92).

Bajo similares plazo y procedimiento es apelable la resolución de prolongación de la prisión preventiva (art. 274.3 NCPP).

Cómputo del plazo

Se excluyen del cómputo, no se considera el tiempo transcurrido efectivamente, cuanto se hubiera declarado la nulidad de lo actuado y dispuesto se dicte nuevo auto de prisión preventiva. De igual manera, se excluye el cómputo cuando se anula un proceso penal militar y se disponga el conocimiento de los hechos punibles por la jurisdicción ordinaria.

Revocatoria de comparecencia por prisión

Conforme al art. 279 NCPP, si se presentan indicios delictivos fundados de que el imputado libre está incurso en los presupuestos materiales de la prisión preventiva (art. 268 NCPP), puede emitirse un auto fundado de revocatoria de la comparecencia por prisión preventiva; cuya emisión está condicionada, conforme al principio de rogación, que lo inste el fiscal. Es, sencillamente, una expresión del elemento de variabilidad que informa toda medida de coerción.

Para acordar esta medida debe celebrarse una audiencia, que se realizará únicamente con los asistentes que concurren. El juez de la investigación preparatoria decide en el mismo acto o dentro de las 48 horas. Contra el auto que se emite, procede apelación con efecto devolutivo, no suspensivo.

Prisión incomunicada

Conforme al art. 280 NCPP, en tanto modalidad de la prisión preventiva, es posible dictar la incomunicación del imputado preso. Procede siempre que sea indispensable para el establecimiento de un

delito grave; esto es, deberá existir peligro de frustración del éxito de la investigación penal [Barona Vilar] -necesidad persecutoria-. Rigen los mismos criterios de la detención incomunicada. Su adopción no podrá afectar las comunicaciones personales que el imputado deba establecer periódicamente con su abogado defensor, pues, de ningún modo el estado de incomunicación puede restringir la garantía de defensa procesal.

El plazo de duración es de hasta diez días. La resolución se expide sin trámite alguno. Es recurrible en apelación dentro del plazo de un día, impugnación que no es suspensiva. Una vez vencido el plazo, cesa automáticamente. El Tribunal Superior resuelve previa vista de la causa, señalada dentro de las 48 horas de recibido el expediente, y la decisión se emite el día de la vista o al día siguiente.

Cesación de la prisión preventiva

Es una institución contracautelar prevista en el art. 283 NCPP. La cesación se sustenta tanto en el principio de intervención indiciaria como en el principio de proporcionalidad, y tiene como eje la nota característica de variabilidad a partir de nuevos elementos de convicción en relación con los presupuestos materiales de la prisión preventiva, a su circunstancias fácticas. La variación puede provenir tanto del *fumus delicti comissi* cuanto del *periculum in mora* (gravedad del hecho o peligro procesal); es decir, de una disminución de la intensidad de su presencia (Ejecutoria Suprema RN 3100-2009, de 11-02-11). Igualmente, la medida cesa cuando el imputado haya sido condenado o absuelto en primera instancia, pues como la prisión es un instrumento para asegurar el éxito del proceso penal, resulta consecuente que la decisión que pone fin a dicha averiguación sea el punto final de esta medida de coerción.

La cesación, como medida provisional que es, importa la imposición en reemplazo de la prisión preventiva de una medida menos intensa. La opción por una de ellas requiere, adicionalmente, tomar en cuenta tres factores específicos: 1) características personales del imputado; 2) tiempo de privación procesal de la libertad; y, 3) estado de la causa. Además, debe imponerse al imputado reglas de conducta del art. 288, definidas como restricciones, cuyo objeto es garantizar la presencia

del imputado y evitar que lesiona la finalidad de la medida. Su incumplimiento determina la revocatoria de la cesación, que también se extiende a la no comparecencia injustificada a las diligencias del proceso, y cuando varíen los presupuestos materiales que la condicionaron. Perderá, asimismo, la caución si la hubiera pagado, la que pasará a un fondo de tecnificación de la administración de justicia. La carga de probar los presupuestos de la cesación corresponde al imputado.

La cesación se resuelve mediante el modelo de audiencia. El auto que se pronuncie puede ser impugnado por el imputado o el fiscal, dentro del tercer día de notificado. La apelación no impide la excarcelación del imputado a favor de quien se dictó auto de cesación de prisión preventiva (art. 284 NCPP).

Cabe acotar que si vuelven a existir los presupuestos materiales de la prisión preventiva, será nuevamente procedente la prisión preventiva del imputado libertado por auto motivado, así aún resta plazo para su ejecución. Si la cesación hubiese operado por vencimiento del plazo razonable de la prisión preventiva, solo es posible la privación procesal de la libertad para la realización de un acto procesal que requiera la presencia del imputado, colaboración de él para con el procedimiento judicial voluntario negada por su incomparecencia, y necesaria para conducir el procedimiento hacia su finalización.

Reformas en materia de cesación de la prisión preventiva

El D. Leg. N.º 1229, de 25-09-15, que modificó el art. 283 NCPP –en rigor, se limitó a numerar los cuatro párrafos del enunciado normativo ratifica el carácter variable, en función a la subsistencia de los correspondientes presupuestos materiales, de la prisión preventiva.

La prisión preventiva debe cesar -es decir, ponerle término cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituirla por la medida de comparecencia. Se requiere un cambio en la situación jurídica del imputado que incida en cualquiera de los presupuestos materiales que determinaron la prisión preventiva: (i) sospecha fundada y grave de vinculación delictiva; y/o (ii) motivos de

prisión: a) gravedad del delito: superior a cuatro años de privación de libertad, y (b) peligrosísimo procesal, centrado en los peligros de fuga o de obstaculización.

La imputación del hecho delictivo puede desvanecerse con nuevos actos de investigación o de prueba -según el caso, su entidad o el título de participación puede disminuir o este puede ser calificado en un tipo legal menos grave al inicialmente considerado como cometido. De igual manera el peligro puede decaer total o parcialmente, al punto de no justificar la privación procesal de la libertad. El decaimiento, por lo regular, procede a través de una actividad investigativa o probatoria adicional o por acción natural del tiempo de prisión –este siempre relativiza el peligrosismo, base y fundamento de la prisión preventiva. La petición de cesación puede ser solicitada por el imputado las veces que lo considere pertinente. Sin embargo, en función a la decisión precedentemente emitida, deberá subsanar, cumplir o tener presente lo que se exija en la resolución judicial precedente.

El procedimiento para decidir sobre la cesación de la prisión preventiva es el típico de las audiencias preparatorias. La ley prevé una resolución oral o una escrita si se emite dentro de las 72 horas siguientes a su culminación.

La sustitución de la medida de prisión preventiva por la de comparecencia, que siempre entraña la cesación de la misma, tiene como efecto la imposición de determinadas restricciones o reglas de conducta: primero, en función a las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación procesal de la libertad y el estado de la causa; y, segundo, que garanticen la presencia del imputado en el proceso o que dañen su finalidad aseguratoria.

ASPECTOS PROBLEMÁTICOS DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL

Como anota Perfecto Andrés Ibáñez: “en estos casos la motivación podría ser sustancialmente eludida en la práctica mediante el empleo de motivaciones tautológicas, apodícticas o aparentes, o incluso a través de la rutinaria repetición de determinadas fórmulas reiterativas de los textos normativos, en ocasiones reproducidas mecánicamente en términos tan genéricos que podrían adaptarse a cualquier situación”.

Considero que la jurisprudencia y la doctrina pueden ser elementos valiosos para asumir la determinación, pero no deben sustituir la argumentación.

La motivación de las resoluciones alcanza a los dictámenes, denuncias o acusaciones del Ministerio Público, pues un debido ejercicio de la acción penal también debería estar adecuadamente motivado. No hay que perder de vista que precisamente son denuncias y acusaciones indebidas o insuficientemente motivadas las que originan procesos que muchas veces son archivados después de una onerosa carga para el Estado y de muchas aflicciones para los sujetos procesales.

Resulta importante determinar también los alcances de los fallos de los jueces constitucionales cuando encuentran que el mandato de detención, materia de hábeas corpus, no está motivado.

Posición distinta fue la asumida por el Tribunal Constitucional en el caso Jeffrey Immelt y otros, donde adoptó una decisión diferente y evolutiva, cuando estableció que el incumplimiento de la garantía de la motivación genera como consecuencia la anulación del auto que impone la medida de coerción. En base a la inexistencia del marco de imputación que causaba indefensión, el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda de habeas corpus y, lo más importante, declaró nulo el auto de apertura de instrucción que contenía el mandato de detención impuesto a los beneficiarios de esta demanda, en consecuencia, se dispuso la suspensión de las órdenes de captura dictados contra todos los afectados (Sentencia recaída en el Expediente N° 8125-2005-PHC/TC. Publicada el 25 de enero de 2006).

Aplicación Temporal de la Ley Procesal Penal en Materia de Coerción Personal (*Oré Guardia, Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal Peruano, 2006*)

La aplicación temporal de la ley procesal penal ha sido un tema muy debatido con motivo de determinar la ley aplicable para imponer la detención preventiva o fijar el plazo de la misma.

En la doctrina, las posiciones son diversas. Entre quienes postulan la extractividad benigna de las normas procesales se encuentran, Fairén Guillén para quien “si una nueva ley procesal penal, concede más garantías al sujeto pasivo— vinculado, acusado, incluso recién

condenado— lo lógico es aplicarla retroactivamente. Lo que no puede hacerse es lo contrario; admitir una retroactividad de la ley “in peius” del sujeto pasivo (por tratarse de un nuevo proceso con menos garantías, menos recursos, etc.)” (Doctrina General del Derecho Procesal, 1990, pág. 68). Para Luis Jiménez de Asúa “Como principio general, las leyes de organización, competencia y procedimiento que se modifiquen en bien de la justicia, pueden ser retroactivas. En particular, en cuanto a organización judicial y competencia, es necesario, no obstante, que observemos el caso excepcional de que se creen tribunales especiales o comisiones ad hoc. Estas jamás podrán tener efectos retroactivos ni ultractividad. En orden a la acción para perseguir el delito, hay que atender a lo favorable al reo; Tampoco serán retroactivas las nuevas disposiciones sobre pruebas, salvo en lo favorable, si afectan a elementos del tipo o si versan sobre culpabilidad o intención, y menos todavía si una prueba útil al reo se suprime. No hay inconveniente en que el rito sea retroactivo, salvo si refluye contra la defensa del reo. Y, finalmente, no podrán ser retroactivas aquellas leyes que supriman un recurso, pero sí las que lo creen” (Perrot, 1958, pág. 158).

En esta misma línea, Alberto Binder manifiesta lo siguiente: “Observamos que de nada serviría que el Estado dijera que nadie podrá ser encerrado en una cárcel si previamente no se ha establecido el delito por el cual se condena y si no se realiza previamente un juicio, si luego la ley procesal penal puede ser modificada a antojo del legislador, dándose efecto inmediato a una nueva modalidad de juicio y de proceso de la cual resultara eventualmente, una condena”, para el profesor argentino “La irretroactividad de la ley procesal es una manifestación más – muy importante- del intento común de ponerle frenos al Estado para evitar que las personas sean encarceladas por motivos distintos de la comisión de un hecho punible. (...) Por lo tanto el principio garantista fundamental consiste en la irretroactividad de la ley procesal. (...) La ley procesal penal es irretroactiva cuando altera el sentido político – criminal del proceso penal”.

En la postura contraria, esto es, quienes admiten la retroactividad de la norma procesal tenemos a Maurach, para quien “La prohibición de retroactividad sólo rige para aquellas normas que fijan las consecuencias

jurídicas de un hecho cometido” (MAURACH, 1994, pág. Tomo I 197). En ese mismo orden Jescheck, quien sostiene que “En el actual Derecho, la prohibición de retroactividad no rige para los preceptos procesales, y por tanto, tampoco es aplicable a los presupuestos del proceso” (WEIHEND, 2002, pág. 186). Por su parte, García Rada, afirma que “En el procedimiento, no puede hablarse de retroactividad, pero los realizados conforme a la ley anterior conservan su validez y surten sus efectos legales en forma completa”. Finalmente, César San Martín sostiene que “La retroactividad benigna siempre ha sido entendida desde la lógica del castigo y la pena estatal, nunca desde el proceso. La retroactividad de la ley más benigna sólo esta proclamada respecto de las leyes penales, esto es, normas sancionadoras, más no aquellas que restringen derechos individuales o fundamentales” (SAN MARTÍN CASTRO, 2002, págs. 15-33)

Para determinar los efectos de la ley penal es necesario acudir a los principios generales, los mismos que son reconocidos - dentro de un Estado de Derecho como garantías del individuo: "el principio de la irretroactividad" (se prohíbe aplicar de manera retroactiva la ley penal desfavorable), prevista en el artículo 103º de la Constitución, y "el principio de favorabilidad" (se debe de aplicar de manera retroactiva una ley penal favorable), previsto en el artículo 139º inciso 11 de la Constitución. Lo polémico del tema se centra en determinar si esta última excepción alcanza a la ley procesal penal cuando ella es una ley restrictiva de derechos fundamentales.

Además, no hay que olvidar que el artículo 137 del Código Procesal Penal, no debe de ser interpretado de manera aislada, sino en concordancia con el artículo IX del Título Preliminar del código en referencia que establece lo siguiente: “La Ley procesal penal es de orden público y se aplica en el territorio nacional desde el comienzo de su vigencia, inclusive para lo que resta del proceso por un delito cometido con anterioridad y cuya sentencia no ha quedado firme, siempre que se trate de disposiciones más favorables al imputado”. De esta manera se consagra el principio de favorabilidad en la aplicación de la ley procesal penal, desde que se declara que la aplicación a lo que resta del proceso se supedita a que se

trate de disposiciones más favorables al imputado (CASTILLO ALVA, 2004, pág. 30).

Una de las leyes que mayor cuestionamiento originó fue la ley N° 27553, pues en la Disposición Transitoria Única se establecía que ella “se aplica a los procedimientos en trámite”, a pesar de constituir una norma más restrictiva, al extender los plazos establecidos para configurar el exceso de detención y provocar la excarcelación.

El valor supremo de la libertad, debe estar por encima del interés del Estado, tal como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N° 873-2000-HC/TC (Caso Luis Alberto Heraldo Jaramillo. F. J. N° 5. Publicada el 19 de enero de 2001) cuando afirma que en toda interpretación normativa se debe anteponer la persona al Estado: Las consecuencias de esta interpretación resultan demasiados peligrosas si atendemos que lo que busca nuestra Constitución es dar el marco adecuado a fin de abandonar el criterio inquisitivo que tenemos del proceso penal, buscando alcanzar uno de corte más garantista.

Esta situación se agravó cuando el Tribunal Constitucional, en su momento, no asumió una posición clara con respecto a la retroactividad o ultractividad de la ley procesal penal. En este sentido, cómo se entiende que el Tribunal Constitucional peruano haga suya la posición de la retroactividad de la ley procesal penal cuando perjudica al procesado bajo el argumento que la referencia a “ley penal” en la Constitución, sólo se refiere a la de carácter sustantiva y no procesal, así por ejemplo en la sentencia recaída en el expediente N° 2496-2005-PHC/TC (Caso Valencia Gutiérrez. F. J. N° 12 y 13.

El Peligro Procesal (Oré Guardia, Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal Peruano, 2006)

Finalmente, existe una tercera tendencia (legislativa y jurisprudencial) propia del modelo de prevención radical de incorporar nuevos supuestos de peligro procesal, como por ejemplo: la reiterancia, la gravedad de la pena, criterios personales del procesado, factores morales o cuestiones de orden público, etc. Consideramos que esta postura contradice el modelo constitucional y la opción política criminal asumida desde el Código Procesal Penal de 1991, por las siguientes consideraciones.

Considero inconstitucional la institución de la reincidencia [y la habitualidad] pues atentan contra el principio de resocialización de las

penas consagrado en el artículo 139 inciso 22 de la Constitución (se trastoca la idea de la resocialización como deber del Estado para convertirse en un deber del condenado), y el de presunción de inocencia pues comporta una presunción de peligrosidad que agrava la pena prescindiendo de actividad probatoria alguna. Por lo demás, el Tribunal Constitucional ha declarado que “ninguna de las finalidades preventivas de la pena podría justificar que exceda la medida de la culpabilidad en el agente” (Sentencia recaída en el expediente N° 019- 2005-AI/TC. Caso Arresto Domiciliario: Ley N° 28568. Fu. J. N° 41. Publicada el 21 de julio de 2005).

La reincorporación de la reincidencia por el legislador, sin embargo, no constriñe al Juez a que las aplique en todos los casos y sin excepciones. Esta institución asume, pues, un carácter facultativo. Eso se desprende del verbo empleado por el legislador: El Juez “podrá”. Finalmente, pero no por ello menos importante, debemos tener en consideración la modificación del artículo 69 por la ley N° 28730 (Publicada el 9 de mayo de 2006), cuando al incorporar el último párrafo establece que “La reincidencia deja sin efecto la cancelación de los antecedentes penales, judiciales y policiales, hasta el cumplimiento de la nueva pena”. Con lo cual se está desconociendo la naturaleza de la rehabilitación y el cumplimiento íntegro de la condena.

También pueden citarse los casos de prohibición para salir a trabajar o estudiar, desconociéndose con ello otros derechos fundamentales. Si bien la norma no establece este supuesto, es posible sostener su procedencia. Así, lo reconoció el Trigésimo Cuarto Juzgado Penal de Lima (Expediente N° 027-98. Caso Román Bueno Aceña) en el que se dispuso el permiso de trabajo bajo la consideración de que “...la detención domiciliaria en ningún caso determina el enclaustramiento total del justiciable en su morada, pues su apartamiento de un espacio con barrotes no es el elemento diferenciador de su reclusión efectiva...”. En esa misma orientación la resolución emitida por la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, en el Expediente 12-2001 (Caso Pedraza Barreda) en el que se estableció que la detención domiciliaria “...no se debe contraponer a los demás derechos constitucionales que no han sido limitados, como es el derecho a trabajar libremente garantizado así por la Constitución Política...”.

Otro de los problemas aplicativos de la detención domiciliaria es el relacionado a su plazo. Si bien el Código Procesal Penal no establece cuánto tiempo debe estar una persona con detención domiciliaria, se entiende que por un criterio de proporcionalidad y provisionalidad, ésta debe durar mientras persistan los elementos que le dieron lugar, o hasta que surjan nuevos elementos que hagan variar su situación, en especial el peligro procesal.

LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

La prisión preventiva es una medida cautelar limitativa del derecho fundamental a la libertad personal, valida en la medida de que se encuentre en riesgo la presunción fundada y razonable de que se pretende obstruir la actividad probatoria, sea porque se tienen los mismos elementos para temer la evasión en la aplicación de una eventual sentencia condenatoria; y siempre que su dictado resulte compatible con los principios de subsidiariedad, razonabilidad y proporcionalidad (Caso Silva Checa. STC 1091 -2002 -HC, Fundamento 5 y siguientes. 12/08/2002.)

Finalidad de la Prisión Preventiva.

La prisión preventiva tiene como finalidad instrumental la realización exitosa del proceso penal, siendo su objeto asegurar la presencia del imputado y aplicar la sanción como resolución del conflicto penal y la determinación de si es factible la pretensión punitiva; pues en ningún caso tendrá, la finalidad de garantizar la ejecución de una futura condena.

Por ello, la prisión preventiva no puede perseguir objetivos del Derecho penal material, no puede asumir funciones preventivas que están reservadas a la pena, sino una finalidad de carácter procesal; la sustracción del inculpado a la justicia, el peligro de tal sustracción o el peligro de obstaculización de la investigación.

De esta manera, la Circular sobre Prisión Preventiva, emitida por la Corte Suprema señala que: “Ello es así porque la prisión preventiva no es otra cosa que una medida coercitiva personal, que solo puede tener fines procesales, cuyo propósito radica en asegurar el normal desarrollo y resultado del proceso penal [consolidar, en suma, (i) el proceso de conocimiento (asegurando la presencia del imputado en

el procedimiento y garantizando una investigación de los hechos, en debida forma por los órganos de la persecución penal) o (ii) la ejecución de la pena]"(En considerando segundo de la circular sobre prisión preventiva. Resolución Administrativa N° 325-2011-P-PJ).

La prisión preventiva ¿regla o excepción?

La excepcionalidad de las medidas cautelares es uno de los principios que resulta de mayor exigencia cuando hablamos de encarcelamiento preventivo.

Sin embargo, el principio no opera, en la práctica, como mecanismo protector de la libertad y del principio de inocencia, sino, como principio fundamental que regula toda la institución de la prisión preventiva. El Juez tiene la potestad de emitir resoluciones que restringen derechos fundamentales esenciales como la libertad ambulatoria por lo que debe tener presente este principio. La prisión preventiva se debe ordenar solo en el caso que sea absolutamente necesario para hacer frente al alto riesgo procesal.

Se debe evitar que la prisión preventiva sea usada como castigo y considerarla una pena anticipada.

2.3.- Definiciones Conceptuales

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación es necesario precisar la definición de los términos básicos u operativos, que se invocan en la formulación del problema como en el desarrollo de la investigación, con la finalidad de explicar y comprender el fenómeno bajo investigación.

- **Medidas coercitivas en el NCPP.**

Son Limitaciones a los Derechos Fundamentales con el fin evitar o servir de paliativo a los riesgos de que el proceso penal no concrete de manera efectiva su finalidad.

- **El Proceso Penal**

"Proceso" deriva de la palabra latina "procederé", que significa: camino hacia un determinado fin. El proceso es el conjunto de actos que se suceden en el tiempo, manteniendo relación, de

modo que están concatenados, sea por el fin perseguido, sea por la causa que los genera.

- **El Imputado**

Sin defensa no hay proceso. Este axioma jamás debe ser olvidado, pues engarza perfectamente con el principio de presunción de inocencia y el derecho de resistencia ante la persecución penal. A la Constitución y al Código Procesal Penal Vigente, les importa que al imputado o a la persona que soporta una incriminación, desde que se adelanta contra él siquiera una sospecha de intervención en un evento criminal, se lo reconozca como sujeto procesal rodeado de garantías y escudos protectores, y no como un simple objeto de indagación, infeliz papel al que lo ha reducido, el procedimiento mixto de tendencia inquisitorial, aún vigente en parte de la ciudad de Lima.

- **Ministerio Público**

César San Martín Castro (San Martín Castro, 2016, págs. 203-204) conceptúa, El Ministerio Público es considerado por el art. 158 de la Constitución como un órgano autónomo de derecho constitucional, que significa un complejo orgánico propio y distinto, de naturaleza pública, que no depende de poder alguno o de otra institución estatal- y que, por imperio del art. 159 de la citada Ley Fundamental, es el encargado de promover la acción de la justicia en defensa de legalidad y de los intereses tutelados por el derecho -provoca el ejercicio de la potestad jurisdiccional; es un órgano requirente por antonomasia- Se puede decir, entonces, que el fiscal es un funcionario guardián de la legalidad, que únicamente ha de servir al derecho; como tal, debe intervenir siempre que estén en juego normas de carácter imperativo o los derechos fundamentales de los ciudadanos. El juez penal no juzga por sí mismo, sino solo a iniciativa del Ministerio Público, cuya intervención es el presupuesto necesario de la actividad jurisdiccional. En tanto ha operado “una expropiación del

conflicto” [Christie], el Estado no solo asume el deber juzgar, sino que tampoco abandona la persecución de los delitos en manos de los particulares.

- **Requerimiento**

Los requerimientos son solicitudes a la autoridad judicial para la realización de una actuación procesal (artículo 122, inciso 4). Se entiende que tal solicitud debe estar acompañada de elementos de convicción que justifiquen la necesidad de aquello (Angulo Arana, 2006, pág. 106).

2.4.- Hipótesis

a) GENERAL

HG: La prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016.

b) ESPECIFICAS

HE1: La presunción de inocencia es transgredida por el nuevo proceso penal en el Perú.

HE2: El derecho procesal peruano es predominante sobre el principio y garantía constitucional de la Presunción de Inocencia en el Perú.

HE3: La prisión preventiva quebranta el derecho a la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco en el periodo 2015-2016.

2.5.- Variables

a) INDEPENDIENTE: VI: Prisión preventiva.

b) DEPENDIENTE: VD: Presunción de inocencia.

2.6.- Definición Operacional de Variables, Dimensiones e Indicadores

VARIABLES	DIMENSIONES	INDICADORES
Vi: La prisión preventiva.	conceptos Administradores de justicia Medidas Cautelares	Legislación Jurisprudencia Doctrina Ministerio Publico Poder Judicial Personales Reales
Vd: la presunción de inocencia.	Definiciones Control	Legislación Jurisprudencia Doctrina Juez Penal de Garantías Defensa Técnica Investigado

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

III.- MARCO METODOLÓGICO

3.1 Tipo de investigación

Es de tipo Aplicado puesto que se aplicará la norma hecho objeto de estudio

3.1.1. Enfoque

Es de enfoque cuantitativo-cualitativo

3.1.2. Alcance o nivel

El nivel es descriptivo-explicativo.

3.1.2. Diseño

El diseño aplicado fue el diseño No experimental, transaccional, simple, descriptivo, porque no se manipuló ninguna variable, solo se observó tal como ocurre en la realidad socio jurídica. Es transaccional porque el recojo de información y de los datos se realizó en un solo momento en el tiempo y espacio.

Esquema del diseño de investigación.

tiene el diseño No experimental, transaccional simple cuyo esquema es:

Dónde:

O = Es la observación realizada a la muestra

M = Es la muestra observada

3.2.- UNIVERSO/POBLACIÓN Y MUESTRA

Determinación del Universo/Población

Nuestra población está determinada por la población de Informantes o fuentes; para efectos de la presente investigación nuestra población está determinada por las fuentes bibliográficas, documentales que será comprendido por estadísticas que serán solicitados a la Corte Superior de Justicia de Huánuco y a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco.

Distrito Judicial de Huánuco	Expedientes con Prisión Preventiva y Sentencia Absolutoria
-------------------------------------	---

Además, el presente proyecto de investigación es de tipo cuantitativa no experimental, en la cual no se conforman grupos de estudio; sin embargo, se tendrán en cuenta, para efectos del proyecto de investigación, se tendrán expedientes de Procesos Penales escogidos aleatoriamente.

Selección de Muestra

Nuestra muestra está determinada por la población de Informantes o fuentes; para efectos de la presente investigación nuestra muestra está determinada por las fuentes bibliográficas y documentales que será comprendido por estadísticas que serán solicitados a la Corte Superior de Justicia de Huánuco y a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Huánuco.

Distrito Judicial de Huánuco	Expedientes con Prisión Preventiva y Sentencia Absolutoria en la Provincia de Huánuco.
-------------------------------------	---

Además, el presente proyecto de investigación es de tipo cuantitativa no experimental, en la cual no se conforman grupos de estudio; sin embargo, se tendrán en cuenta, para efectos del proyecto de investigación, la opinión de diez reos con prisión preventiva del Establecimiento Penitenciario de Potracancha, y diez Magistrados entre Fiscales (05) y Jueces (05). Y el estudio de 5 expedientes de procesos penales.

3.3.- TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

a) Para la recolección de datos y organización de datos.

Técnicas	Instrumentos
Fichaje	Fichas de resúmenes, textuales, bibliográficas las misma que permitieron el recojo de información para el marco teórico
Entrevista	guía de entrevista a Fiscales, Jueces, abogados. Funcionarios responsables de las DEMUNAS en materia penal.
Encuesta	Ficha de encuesta tipo cuestionario para los usuarios que recurren a las instancias a denunciar delitos de Trata de personas
Análisis de contenidos	matriz de análisis de documentos: para el recojo de datos de las sentencias y/o acusaciones fiscales.

b) Para la interpretación y análisis de datos.

Para la interpretación se procedió inicialmente a tabular en un cuadro los datos obtenidos por nuestros instrumentos, luego se plasmaron en cuadros de distribución estadística y los gráficos estadísticos simples, la misma que constituyó base para contrastar la hipótesis planteada. El presente informe, por tratarse de una investigación de tipo básico, basado en entrevistas, encuestas y análisis de expedientes. Los datos fueron procesados mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de las entrevistas a los operadores judiciales en los juzgados de penal como de los análisis de los 10 expedientes entre los años 2015 al 2017. El análisis de estos datos sirvió para constatar nuestra hipótesis de dos formas: Una de manera descriptiva simple; y otra de manera cualitativa, es decir haciendo una comprensión y análisis a partir de nuestro marco teórico; asimismo sirvieron para para procesar los resultados en las tablas y esquemas.

c) Técnicas de presentación de datos.

Se utilizó las tablas y gráficos estadísticos a través de la frecuencia simple y el porcentaje.

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

TABLA N°01

muestra los resultados de las entrevistas a los fiscales y magistrados sobre la prisión preventiva en Huánuco.

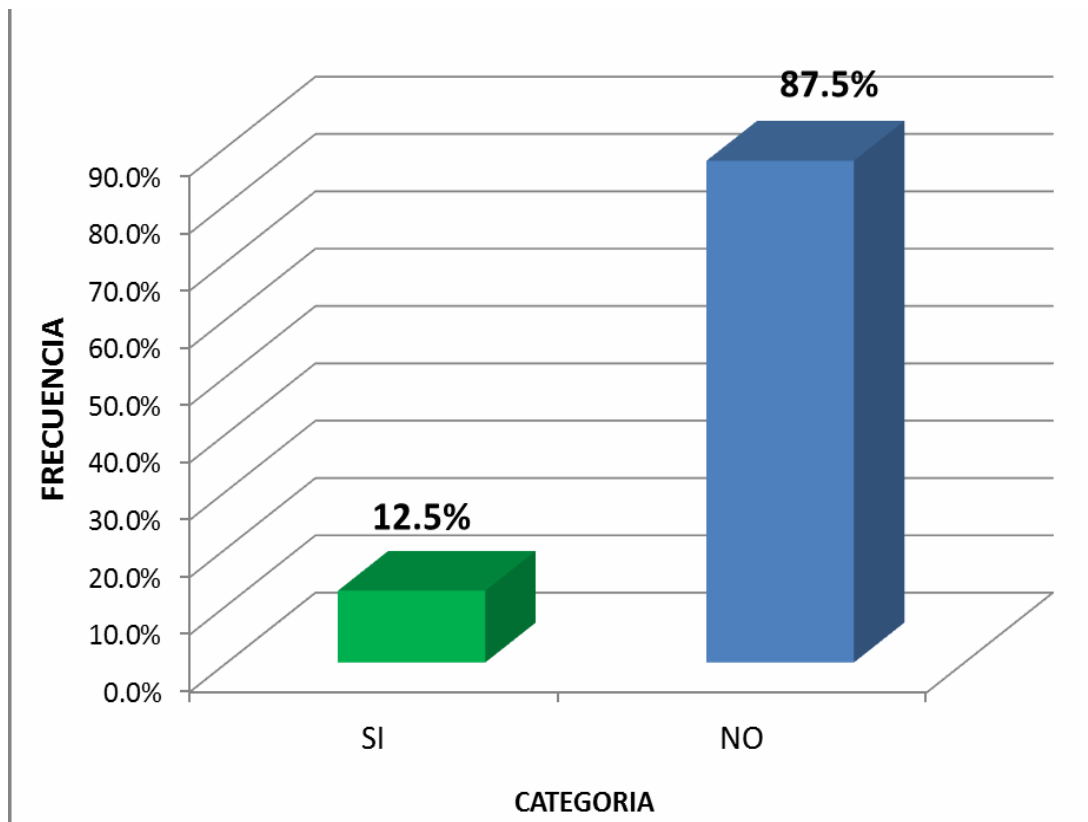
1. ¿Considera Ud. Que es constitucional privar de su libertad al sindicado mediante la prisión preventiva.?	Frecuencia	Porcentaje
SI	1	12,5%
NO	7	87,5%
TOTAL	8	100%

Fuente: anexo 1

Elaborado por: La investigadora

Gráfico N°01

Muestra el criterio de justificación de la prisión preventiva



Fuente: Tabla N°1

Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

Observamos los resultados de la aplicación de la ficha de entrevista a los fiscales y magistrados que laboran en el distrito fiscal y judicial de Huánuco que un 87.5% dicen que si es constitucional. Mientras que el 12.5% dicen que no es constitucional.

Conclusiones.

con la cual podemos concluir la mayoría de los operadores de justicia consideran constitucional la aplicación de la prisión preventiva.

TABLA N°2

Muestra las opiniones de los magistrados y fiscales que laboran en el distrito fiscal y judicial de Huánuco.

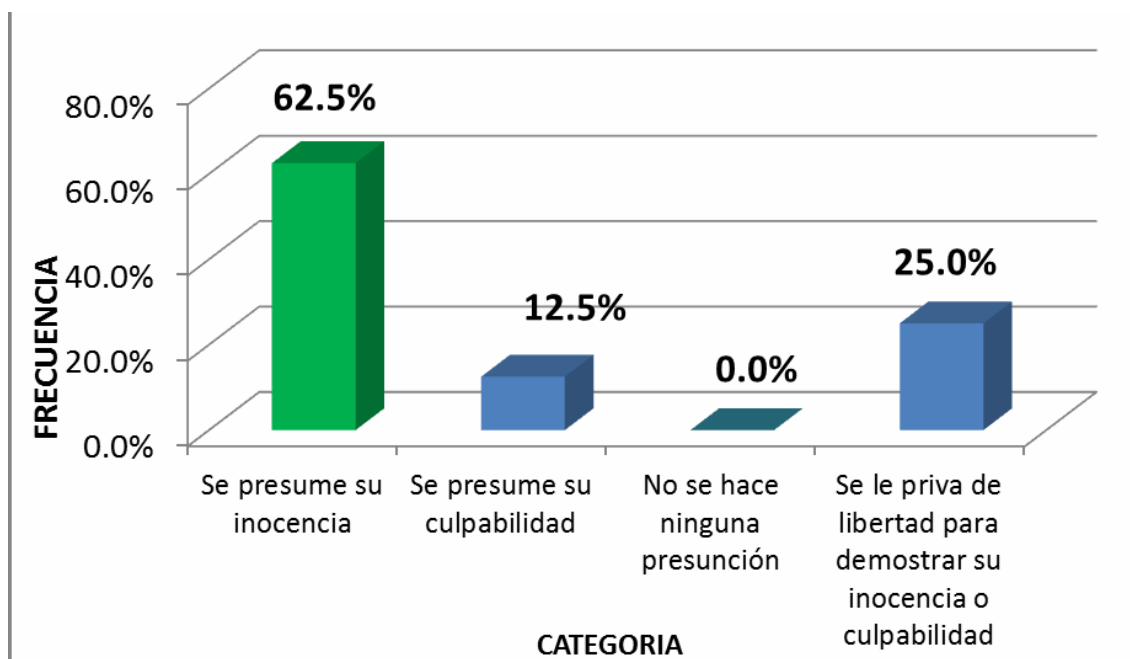
2. ¿Cuándo se impone la prisión preventiva a un investigado contra el cual sólo existen sospechas, que hacen suponer que ha cometido o participado en la comisión de un delito ¿Qué se presume de éste investigado?	Frecuencia	Porcentaje
Se presume su inocencia	5	62,5%
Se presume su culpabilidad	1	12,5%
No se hace ninguna presunción	0	0,0%
Se le priva de su libertad para demostrar su inocencia o culpabilidad	2	25,0%
Total	8	100%

Fuente: anexo 01

Elaborado por: La investigadora

Gráfico N°2

Muestra lo que presumen con la aplicación de la prisión preventiva.



Fuente: Tabla N°2

Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación.

observamos los resultados donde un 62.5% presumen su inocencia. Y el 25.0% dicen se le priva para demostrar si es o no culpable. Y los 12.5% dicen que se presume su culpabilidad. Y el 0.0% no hacen ninguna presunción.

Conclusiones.

Con la cual concluimos la mayoría de fiscales y magistrados presumen su culpabilidad.

TABLA N°3

Muestra la consideración que tienen los magistrados al ordenar la prisión preventiva en contra del investigado.

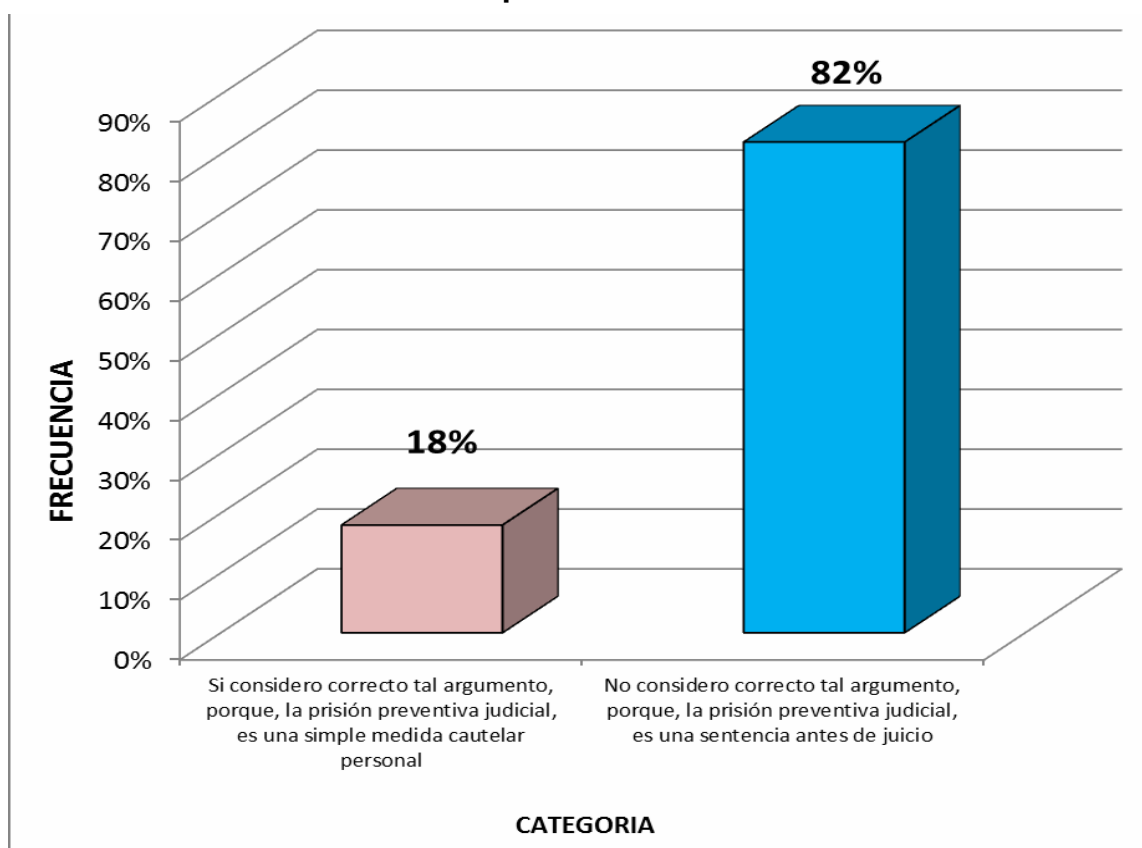
3. ¿Cómo considera Ud., en su condición de Magistrado, ordenar la prisión preventiva en contra del investigado?	Frecuencia	Porcentaje
Si considero correcto, porque, la prisión preventiva, es una simple medida cautelar personal.	3	37,5%
No considero correcto, porque, la prisión preventiva, es una sentencia antes de juicio.	5	62,5%
Total	8	100%

Fuente: anexo 01

Elaborado por: La investigadora

Gráfico N°3

muestra si se considera correcto la argumentación sobre la prisión preventiva.



Fuente: Tabla N°3

Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación.

Observamos los resultados que el 82% no lo considera correcto porque, la prisión preventiva, es una sentencia antes de juicio. Y el 18% considera que sí.

Conclusiones.

con lo que concluimos que la mayoría de los fiscales y jueces no están de acuerdo.

TABLA N°4

Muestra el criterio de aplicación de la prisión preventiva por peligro de fuga u obstaculización.

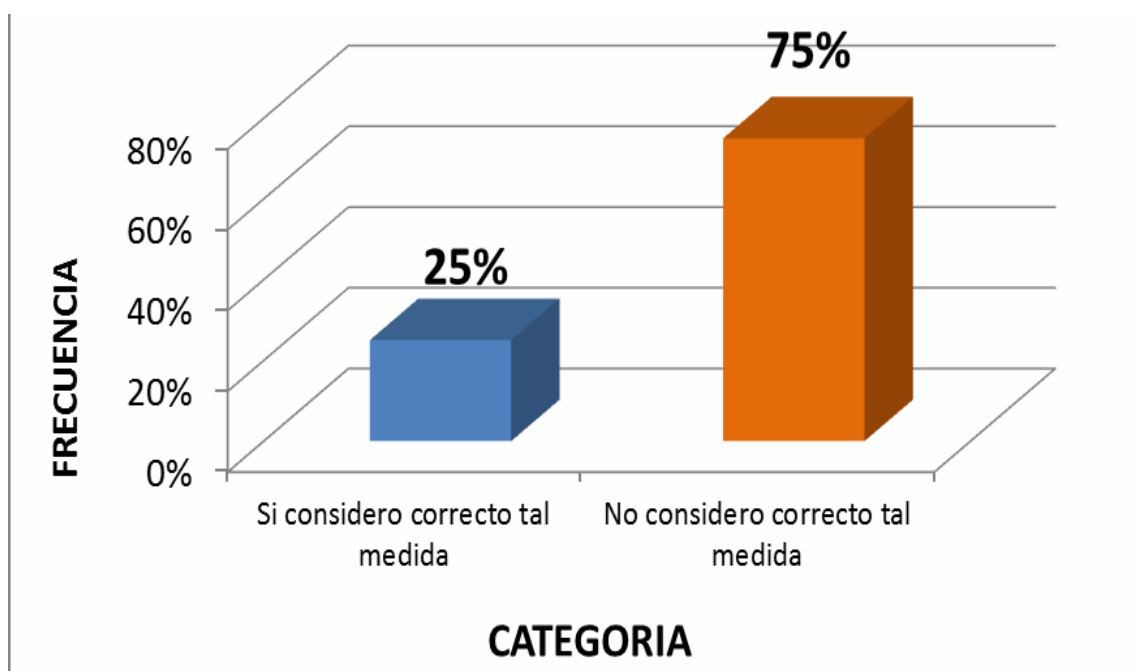
4. Ud., en su condición de magistrado ¿considera correcto ordenar la prisión preventiva del investigado con los argumentos de peligro de fuga y peligro de obstaculización?	Frecuencia	Porcentaje
Si considero correcto tal medida	2	25%
No considero correcto tal medida	6	75%
Total	8	100%

Fuente: anexo 01

Elaborado por: El investigador

Gráfico N°4

Muestra si los argumentos son prácticos en la aplicación de la prisión preventiva.



Fuente: Tabla N°4

Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

observamos los resultados de la aplicación de la ficha de encuesta a los magistrados que el 75% no consideran correcto tal medida mientras que el 25% si consideran correcto tal medida.

Conclusiones.

Concluimos que la mayoría de los magistrados no está de acuerdo con tal medida.

TABLA N°5

muestra el nivel de consideración que tienen los fiscales, magistrados sobre la prisión preventiva.

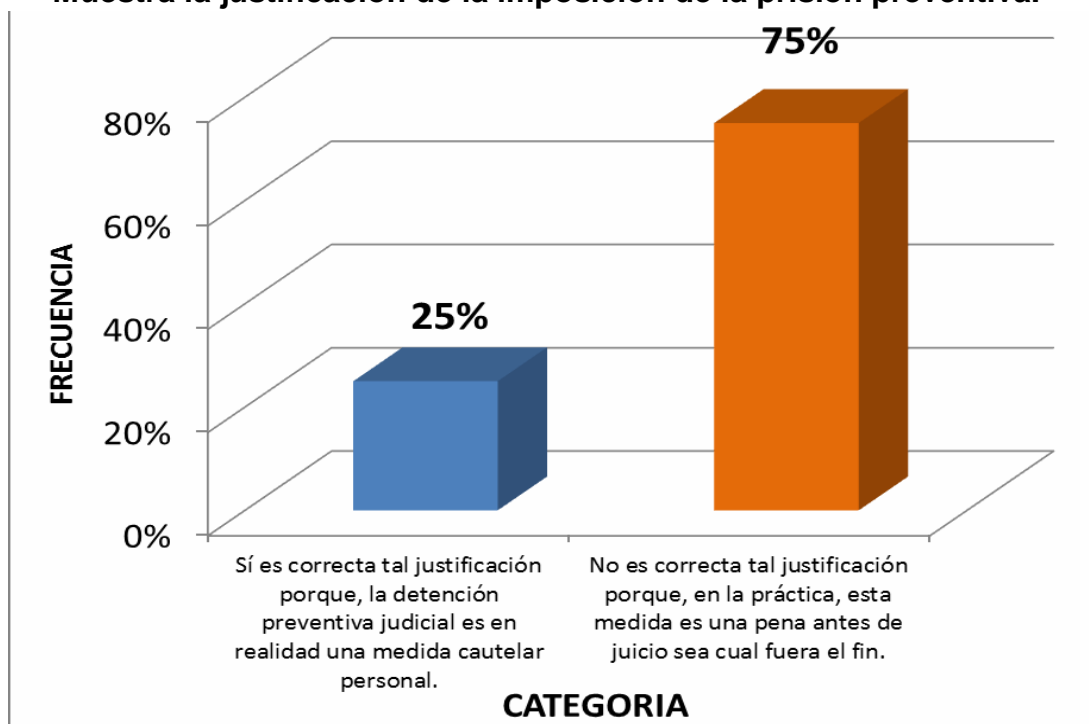
5. ¿Cómo considera Ud., la justificación de la prisión preventiva, como medida cautelar?	Frecuencia	Porcentaje
Sí es correcta tal justificación porque, la detención preventiva es en realidad una medida cautelar personal.	2	3%
No es correcta tal justificación porque, en la práctica, esta medida es una pena antes de juicio sea cual fuera el fin.	23	33%
No muestran ninguna voluntad para sancionarla	45	64%
Total	70	100%

Fuente: anexo 01

Elaborado por: La investigadora

Gráfico N°5

Muestra la justificación de la imposición de la prisión preventiva.



Fuente: Tabla N°5

Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

Observamos los resultados de la aplicación de la ficha de entrevista a los magistrados y fiscales que un 75% manifiesta que no es correcta tal justificación. Y el 25% si considera correcta.

Conclusiones

Con la cual concluimos que la mayoría de fiscales y magistrados no consideran correcta tal justificación.

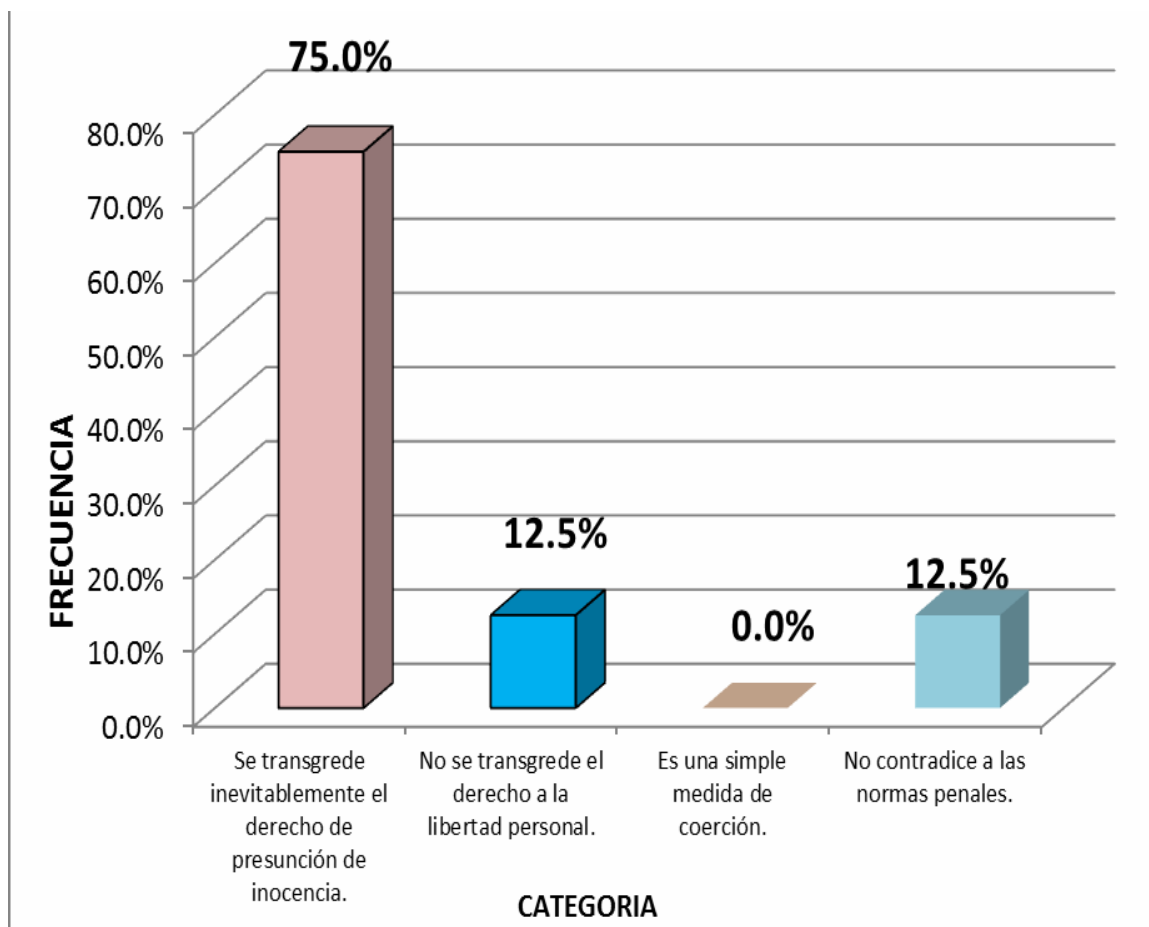
TABLA N°6

Muestra el criterio de aplicación de los fiscales y jueces sobre la prisión preventiva.

6. ¿Según su criterio, cuando primero se detiene a un sindicado mediante la prisión preventiva, luego se investiga por la inocencia o culpabilidad del investigado ¿se transgrede inevitablemente el derecho de presunción de inocencia del investigado?	Frecuencia	Porcentaje
Se transgrede inevitablemente el derecho de presunción de inocencia.	6	75.0%
No se transgrede el derecho a la libertad personal.	1	12.5%
Es una simple medida de coerción.	0	0.0%
No contradice a las normas penales.	1	12.5%
Total	8	100%

Fuente: anexo 01
Elaborado por: La investigadora

Gráfico N°6
muestra si la transgresión es inevitable por aplicación de la prisión preventiva.



Fuente: Tabla N°6
 Elaborado por: La investigadora

Análisis e interpretación

Observamos los resultados de la aplicación de la ficha de entrevista donde un 75% manifiesta que si se transgrede inevitablemente el derecho de presunción de inocencia. El 12.5% dice que no se transgrede el derecho de libertad personal. 12.5% que no contradice a las normas penales. Se muestra un 0% como medida de coerción.

Conclusiones

la mayoría de los magistrados manifiestan que si son transgredidos inevitablemente el d derecho de presunción de inocencia.

CAPÍTULO V

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. contrastación de resultados.

A.- Contrastación con los objetivos de investigación.

Luego de la terminación de la investigación, es sumamente necesario realizar la confrontación de la situación problemática de los asientos teóricos y de la conjetura propuesta con las resultas obtenidas, subsecuentemente, se confirma que, la preventiva prisión judicial como disposición de aseguramiento del propósito del proceso vulnera el derecho de la presumir de inocencia.

La interrogante que hemos planteado al iniciar el trabajo de indagación es:

Determinar si la prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016.

luego de haber concluido la investigación y, a la luminiscencia de los resultados obtenidos, se pudo determinar que, la prisión preventiva, como medida de aseguramiento de la finalidad del proceso, vulnera el derecho de presunción de inocencia, tal como se evidencia den los cuadros y gráficos obtenidos al concluir la investigación.

B.- Contrastación con las hipótesis de investigación.

Habiéndose formulado de la siguiente manera: La prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016.

Con referencia a la justificación de la prisión preventiva con el argumento de que éste no contradice a la de presumir de inocencia,

es correcto tal justificación, porque, en la práctica, esta medida es una condena a priori de un juicio sea cual fuere el fin. **Por lo tanto, aceptamos como válida y cierta esta hipótesis general.**

- Formulada la sub hipótesis La presunción de inocencia es transgredida por el nuevo proceso penal en el Perú. Con relación a la transgresión inevitable del derecho de presunción de inocencia con prisión preventiva, se trasgrede inevitablemente el derecho de presumirse su inocencia. **Por lo tanto, debemos aceptar como válida y cierta la sub hipótesis 1**

- Formulada la sub hipótesis El derecho procesal peruano es predominante sobre el principio y garantía constitucional de la Presunción de Inocencia en el Perú. Definitivamente si privándolos del derecho a defenderse a conseguir evidencias para poder corroborar su inocencia en la investigación. **Por lo tanto, aceptamos en parte la sub hipótesis 2**

- Formulada la sub hipótesis La prisión preventiva quebranta el derecho a la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco en el periodo 2015-2016. Es en esencia es la medida represiva propia más grande que toca sufrir a una persona el ser privado de su libertad sin habersele demostrado la responsabilidad penal. Por lo tanto, aceptamos como válida y cierta la sub hipótesis 3.

CONCLUSIONES

Después de acontecer concluido con el progreso del ahora trabajo de investigación relacionada a preventiva prisión y la vulneración del derecho de presunción de inocencia del investigado, considero de trascendental importancia, habida cuenta que, sienta un precedente científico y académico destinado a la reorientación de ciertos aspectos de nuestro ordenamiento jurídico relacionado al imponer de la prisión preventiva, que tiene trascendencia y relevancia social, pues, quien disputa contra la criminalidad tempranamente por intermedio de la prisión preventiva, no venera el principio de la presumir de inocencia, de tal manera que, en la actualidad, ésta se ciñe en un verdadero adelanto de una pena sin una sentencia final.

RECOMENDACIONES

- Establecer políticas criminales destinadas a regular el uso de la medida judicial de preventiva prisión judicial en contra del investigado, con la finalidad de coadyuven a la reducción del porcentaje de presos, optando por la comparecencia simple, que a su vez permitirán efectuar sobre el investigado una labor resocializadora.
- Lograr que la preventiva prisión judicial se aplique de manera provisional basado en los principios de legalidad, proporcionalidad y principalmente de excepcionalidad, con el propósito de avalar la libertad del procesado en frente al interés colectivo de la represión penal; de manera que se destierre la reincidencia del uso indistinto de esta entidad procesal.

V. Referencias Bibliográficas (modelo APA- Básico)

Bibliografía

- Angulo Arana, P. (2006). *La Investigación del Delito en el Nuevo Código Procesal Penal*. Lima: Editorial Gaceta Jurídica.
- Arana Morales, W. (2014). *Manual de Derecho Procesal Penal para operadores jurídicos del nuevo sistema procesal penal Acusatorio Garantista*. Lima: Editorial Gaceta Jurídica.
- Arana, P. A. (2006). *La investigación del delito en el nuevo código procesal penal*. Lima: gaceta jurídica.
- ASENCIO MELLADO, J. M. (1987). *La prisión Provisional*. Madrid.
- BECCARIA, C. (1968). *De los delitos y de las penas*. Madrid: Alianza Editorial.
- Bernales Ballesteros, E. (1997). *La Constitución de 1993 Análisis Comparado*. Lima: ICS Editores Tercera ed.
- BURGOS MARIÑOS, V. (2010). *La prisión preventiva en el nuevo código procesal penal peruano, estudios sobre la prisión preventiva*. Lima-Perú: Ediciones BLG.
- Camacho Walter y otros. (Agosto 2015). *La Constitución Comentada análisis artículo por artículo, escrita por 166 destacados juristas del País*. Lima-Perú: Gaceta Jurídica.
- CASTILLO ALVA, J. L. (2004). La aplicación favorable de la Ley en materia penal, el problema de la Ley Nº 27770. *En Actualidad Jurídica* 123/2004, 30.
- Conde, F. M. (1991). *Teoría general del Delito*. Valencia- España: Editorial Tirant lo banch.
- Del Río Labarthe, G. (2016). *Prisión Preventiva y Medidas Alternativas Código Procesal Penal 2004*. Lima: Editorial Instituto Pacifico.
- Doctrina General del Derecho Procesal. (1990). *Hacia una teoría y ley procesal generales*. Barcelona: Librería Bosch.
- GÁLVEZ VILLEGAS, T. (2008). *El Código Procesal Penal Comentarios descriptivos, explicativos y críticos*. Lima: Jurista Editores.
- Gimeno Sendra, J. V. (1987). *La Prisión Provisional*. Madrid: Civitas.
- Gonzales, H. E. (13 de 12 de 2016). *abogadoleiva*. Obtenido de Las Medidas de Coerción Procesal en el Nuevo Código Procesal Penal: <http://abogadoleiva.blogspot.pe/2010/07/las-medidas-de-coercion-procesal-en-el.html>
- MAURACH, R. (1994). *Derecho Penal. Parte General*. Buenos Aires: Astrea.
- Miguel, R. A. (2011). *El proceso penal aplicado*. Lima: Grijley.
- Mixán, F. (2005). *Cuestiones epistemológicas y teoría de la investigación de la prueba*. Trujillo: Ediciones BLG.
- Oré Guardia, A. (2006). *Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal Peruano*. Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal.
- Oré Guardia, A. (2006). *Las Medidas Cautelares Personales en el Proceso Penal Peruano*. Lima: Instituto de Ciencia Procesal Penal.
- Perrot, A. (1958). *La Ley y el Delito, Principios de Derecho Penal*. 1958: Editorial Sudamericana.
- Prado H, J., Gallegos, P., & Castillo C, J. (2008). *La Constitución Ecológica y su compatibilidad con las libertades económicas*. . Rae Jurisprudencia.
- Ramos, I. N. (2014). *Guía para elaborar una Tesis de Derecho*. Lima: Grijley.
- SAN MARTÍN CASTRO, C. (2002). Medidas de Coerción. (*Actualidad Jurídica*), 15-33.
- San Martín Castro, C. (2016). *Derecho Procesal Penal Lecciones conforme el nuevo código procesal penal de 2004, Instituto Peruano de Criminología y ciencias Penales*. Lima-Perú: Centros de Altos estudios en ciencias jurídicas políticas y sociales.
- URQUIISO OLAECHEA, J. (2000). *El principio de Legalidad*. Lima.
- WEIHEND, J. y. (2002). *Tratado de Derecho Penal. Parte General*. España: Editorial Comares, Universidad de Granada.

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA

“PRISIÓN PREVENTIVA Y LA VULNERACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN EL DISTRITO JUDICIAL DE HUÁNUCO PERIODO 2015-2016”

EDY LUZ ESPINOZA AGUIRRE

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES	INDICADORES	INSTRUMENTOS
<p>PROBLEMA PRINCIPAL</p> <p>¿En qué medida la prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016?</p> <p>PE1: ¿De qué manera la presunción de inocencia es transgredida por el nuevo proceso penal en el Perú?</p> <p>PE2: ¿En qué grado el derecho procesal peruano es predominante sobre el principio y garantía constitucional de la Presunción de Inocencia en el Perú?</p> <p>PE3: ¿Cómo, la prisión preventiva quebranta el derecho a la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco en el periodo 2015-2016</p>	<p>OBJETIVO PRINCIPAL</p> <p>Determinar si la prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016.</p> <p>OE1: Analizar de qué manera la presunción de inocencia es transgredida por el nuevo proceso penal en el Perú.</p> <p>OE2: Examinar en qué grado el derecho procesal peruano es predominante sobre el principio y garantía constitucional de la Presunción de Inocencia en el Perú.</p> <p>OE3: Investigar como la prisión preventiva quebranta el derecho a la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco en el periodo 2015-2016.</p>	<p>HIPÓTESIS PRINCIPAL</p> <p>La prisión preventiva, influye en la vulneración de la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco periodo 2015-2016</p> <p>HE1: La presunción de inocencia es transgredida por el nuevo proceso penal en el Perú.</p> <p>HE2: El derecho procesal peruano es predominante sobre el principio y garantía constitucional de la Presunción de Inocencia en el Perú.</p> <p>HE3: La prisión preventiva quebranta el derecho a la presunción de inocencia en el Distrito Judicial de Huánuco en el periodo 2015-2016.</p>	<p>VARIABLES</p> <p>VI. prisión preventiva</p> <p>VD. presunción de inocencia</p>	<p>INDICADORES</p> <p>Legislación Jurisprudencia Doctrina Ministerio Publico Poder Judicial Personales Reales.</p> <p>Legislación Jurisprudencia Doctrina</p> <p>Juez Penal de Garantías</p> <p>Defensa Técnica</p> <p>Investigado</p>	<p>INSTRUMENTOS</p> <p>Cuestionario</p> <p>Cuestionario</p>

CUESTIONARIO N° 01

ENCUESTA A LOS SEÑORES FISCALES Y JUECES QUE LABORAN EN EL DISTRITO FISCAL Y JUDICIAL DE, HUÁNUCO.

1.¿Considera usted que es constitucional privar de la libertad al sindicado mediante la prisión preventiva.?

- a) Sí
- b) en algunos casos
- c) no

2.Cuando se impone la prisión preventiva a un investigado contra el cual sólo existen sospechas, que hacen suponer que ha cometido o participado en la comisión de un delito ¿Qué se presume de éste investigado?

- a) Se presume su inocencia.
- b) Se presume su culpabilidad.
- c) No se hace ninguna presunción.
- d) Se le priva de libertad para demostrar su inocencia o culpabilidad.

3.- ¿Cómo considera Ud., en su condición de Magistrado, ordenar la prisión preventiva en contra del investigado?

- a) Si considero correcto, porque, la prisión preventiva, es una simple medida cautelar personal.
- b) No considero correcto, porque, la prisión preventiva, es una sentencia antes de juicio.

4. Ud., en su condición de magistrado ¿considera correcto ordenar la prisión preventiva del investigado con los argumentos de peligro de fuga y peligro de obstaculización?

- a) Si considero correcto tal medida
- b) No considero correcto tal medida

5.- ¿Cómo considera Ud., la justificación de la prisión preventiva, como medida cautelar?

- a) Sí es correcta tal justificación porque, la detención preventiva es en realidad una medida cautelar personal.
- b) No es correcta tal justificación porque, en la práctica, esta medida es una pena antes de juicio sea cual fuera el fin.

6.Según su criterio, cuando primero se detiene a un sindicado mediante la prisión preventiva, luego se investiga por la inocencia o culpabilidad del investigado ¿se transgrede inevitablemente el derecho de presunción de inocencia del investigado?

- a) Se transgrede inevitablemente el derecho de presunción de inocencia.
- b) No se transgrede el derecho a la libertad personal.
- c) Es una simple medida de coerción.
- d) No contradice a las normas penales.

Gracias por su colaboración